



## Evaluación de Sistemas Ambientales y Sociales Nacionales

Preparado para:



1300 New York Ave, NW  
Washington, DC 20577

Programa de Biodiversidad y Equidad  
Urbana en Barranquilla CO-L1269

27 de abril 2022

<b>Detalles del documento</b>	
Título del documento	Evaluación de Sistemas Ambientales y Sociales Nacionales
Document subtitle	Programa de Biodiversidad y Equidad Urbana en Barranquilla CO-L1269
Número de Proyecto	0642726
Fecha	27 de abril 2022
Versión	1.0
Autores	Environmental Resources Management
Nombre del cliente	Banco Interamericano de Desarrollo

27 de abril 2022

## Evaluación de Sistemas Ambientales y Sociales Nacionales

Programa de Biodiversidad y Equidad Urbana en Barranquilla CO-L1269



---

Ricardo N. Calvo, Ph.D.  
Socio a Cargo



---

Diego Soto  
Gerente del Proyecto

Environmental Resources Management, Inc.  
1776 I (Eye) St. NW Suite 200  
Washington, DC 20006

## TABLA DE CONTENIDOS

<b>1.</b>	<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>4</b>
1.1	Antecedentes .....	4
1.2	Objetivos .....	6
1.3	Alcance .....	7
<b>2.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA .....</b>	<b>7</b>
2.1	Componente 1, <i>Ecosistemas Estratégicos</i> .....	7
2.2	Componente 2, <i>Todos al Parque</i> .....	7
2.3	Componente 3, <i>Ciudad Equitativa</i> .....	9
<b>3.</b>	<b>METHODOLOGÍA .....</b>	<b>10</b>
3.1	Recopilación y Revisión de Información .....	10
3.2	Análisis de Impactos y Riesgos .....	10
3.3	Análisis de Equivalencia .....	11
3.4	Análisis de Aceptabilidad .....	12
<b>4.</b>	<b>ANÁLISIS DE RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES .....</b>	<b>13</b>
4.1	Riesgos e Impactos del Componente 1 del Programa, <i>Ecosistemas Estratégicos</i> .....	13
4.2	Riesgos e Impactos del Componente 2 del Programa, <i>Todos al Parque</i> .....	13
4.3	Riesgos e Impactos del Componente 3 del Programa, <i>Ciudad Equitativa</i> .....	14
<b>5.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS .....</b>	<b>14</b>
5.1	Marco Normativo Aplicable Orientado a La Gestión de los Riesgos Identificados .....	15
5.1.1	Leyes y Normativas Aplicables .....	15
5.1.2	Leyes y Regulaciones y Locales .....	29
5.2	Descripción de los Roles y las Responsabilidades Institucionales .....	30
<b>6.</b>	<b>POLÍTICAS Y DIRECTIVAS APLICABLES DEL BID .....</b>	<b>30</b>
<b>7.</b>	<b>ANÁLISIS DE EQUIVALENCIA .....</b>	<b>32</b>
<b>8.</b>	<b>ANÁLISIS DE ACEPTABILIDAD .....</b>	<b>36</b>
<b>9.</b>	<b>PRINCIPALES BRECHAS IDENTIFICADAS .....</b>	<b>38</b>
<b>10.</b>	<b>PLAN DE ACCIÓN .....</b>	<b>38</b>
10.1	Indicadores de Desempeño .....	39
10.2	Monitoreo del Plan de Acción .....	40
<b>11.</b>	<b>CONCLUSIONES .....</b>	<b>40</b>

### Lista de Tablas

Tabla 5-1 Marco Legal Aplicable- Patrimonio Cultural .....	20
Tabla 5-2: Jerarquía de Autoridades Ambientales .....	26
Tabla 5-3: Otros Instituciones Relevantes al Programa .....	28
Tabla 7-1: Análisis de equivalencia entre la política del Banco y los sistemas nacionales/provinciales aplicables al Programa .....	32
Tabla 10-1: Resumen de las brechas identificadas y medidas para cerrarlas .....	39
Tabla 10-2: Resumen de Medidas e Indicadores .....	39

### Lista de Figuras

Figura 2-1: Ubicación de los Proyectos del Componente 2 .....	9
---	---

## Acrónimos y Abreviaciones

Nombre	Descripción
AAS	Análisis Ambiental y Social
AAU	Autoridad Ambiental Urbana
AECID	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
ANLA	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
APP	Asocio Público Privado
ARP	Aseguradora en Riesgos Profesionales
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CCLIP	Líneas de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (por sus siglas en ingles)
CEDAW	Convenio Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
CILM	Centro de Integración Local para Migrantes
CRA	Corporación Autónomas Regional del Atlántico
DAA	Diagnóstico Ambiental de Alternativas
DAP	Diámetro a la altura del pecho
DNP	Departamento Nacional de Planeación
EA	Evaluación Ambiental
EAE	Evaluaciones Ambientales Estratégicas
EASE	Evaluación Ambiental y Social Estratégica
EIA	Estudio de Impacto Ambiental
IAS	Evaluación de Impacto Ambiental y Social
ENA	Estudio Nacional del Agua
ETPMV	Estatuto Temporal de Protección al Migrante Venezolano
ICES	Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles
IGAC	Instituto Geográfico Agustín Codazzi
INSTRAW	Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer

IPCC	Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
MADS	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
OAG	Observatorio de Asuntos entre Género
OE	Organismo Ejecutor
OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONG	Organizaciones sin fines de lucro o no gubernamentales
OP	Procedimiento Operativo
PAP	Programa Arqueológico Preventivo
PBR	Préstamo Basado en Resultados
PEMP	Plan Especial de Manejo y Protección
PGAS	Plan de Gestión Ambiental y Social
PGIRS	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
PIFS	Portal de Información Sobre Fauna Silvestre
SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje
SINA	Sistema Nacional Ambiental
SNPAD	Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres
UNGRD	Unidad Nacional de Riesgo de Desastres
UNIFEM	Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1 Antecedentes

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está preparando una operación de préstamo bajo la denominación “Programa de Biodiversidad y Equidad Urbana en Barranquilla”<sup>1</sup>, Programa CO-L1269, para contribuir a la equidad, sostenibilidad y competitividad urbana de Barranquilla el cual, contiene los siguientes tres componentes:

- Componente 1: Ecosistemas Estratégicos
- Componente 2: Todos al Parque
- Componente 3: Ciudad Equitativa

Los tres componentes del Programa (en adelante, “el Proyecto”), serán financiados a través de un Préstamos Basado en Resultados (PBR), e incluyen las siguientes actividades:

- Promover el uso sostenible de ecosistemas estratégicos. Para lograr este resultado, financiará los costos asociados a las siguientes actividades: (i) diseñar y ejecutar el plan de adquisición predial y reasentamiento; (ii) construcción de barreras de protección ambiental; y (iii) elaborar la estructura del Ecoparque Ciénaga de Mallorquín.
- Incrementar la cantidad de espacio público efectivo en el área urbana del Distrito de Barranquilla. Para lograr este resultado, financiará los costos asociados a: (i) la creación de espacios de co-diseño de parques con la comunidad; (ii) la recuperación de parques y espacios de recreación; (iii) jornadas de vacunación contra COVID-19 y rabia canina y felina; (iv) jornadas de vacuna mental; y (v) jornadas y espacios de comercialización de productos en barrios. Estas obras tendrán criterios climáticos, perspectiva de género y diseño de accesibilidad universal.
- Promover la equidad urbana aumentando el acceso a equipamientos sociales inclusivos y que sean ecoeficientes<sup>2</sup>. Para lograr este resultado, financiará los costos asociados a: (i) el diseño, construcción, adecuación y operación de centros comunitarios multifuncionales, priorizando la juventud, las mujeres, los adultos mayores, y la población migrante; y (ii) el desarrollo de infraestructura recreativa resiliente al cambio climático, incluyendo el diseño, construcción y recuperación de parques, plazas, áreas verdes y espacios públicos libres de violencia basada en género para población migrante y de acogida. Dicho diseño seguirá los lineamientos para garantizar el acceso universal para la población con discapacidad.

### Préstamos Basados en Resultados

Los PBR (Prestamos Basados en Resultados) son préstamos de inversión que financian los costos de las actividades (bienes, obras y servicios) asociadas con el logro de tales resultados y que se desembolsan una vez que estos resultados hayan sido logrados y verificados.

Los procedimientos para el procesamiento de este tipo operaciones por parte del Banco establecen que la identificación y manejo de riesgos asociados al proyecto o programa deberán ser realizados de manera similar a otras modalidades de financiamiento. Considerando que en los PBR los desembolsos se realizan después que los resultados del proyecto hayan sido alcanzados, la ejecución de las actividades para alcanzar dichos resultados se lleva a cabo en base a la aplicación de los sistemas nacionales de salvaguardias ambientales y sociales del país prestatario. Por lo tanto, durante la etapa de preparación de las operaciones PBR, el Banco debe evaluar el riesgo que conlleva la aplicación de tales sistemas nacionales en el desarrollo de las actividades de la operación y eventualmente acordar con el Prestatario las medidas de mitigación correspondientes.

<sup>1</sup> <https://www.barranquilla.gov.co/programa-de-biodiversidad-y-equidad-urbana-en-barranquilla>

<sup>2</sup> Se certificará la ecoeficiencia de los diseños y construcciones de los dos centros comunitarios y el CILM a través del programa Excellence In Design for Greater Efficiencies (EDGE, por sus siglas en inglés) de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés).

En julio de 2017 el Banco emitió la guía de “lineamientos para procesar préstamos del banco basados en resultados”. Esta guía señala que: (i) los proyectos de Categoría A no pueden ser financiados a través de este instrumento de préstamo; y (ii) los análisis de salvaguardas ambientales y sociales deben seguir procedimientos estándar del Banco.

## Salvaguardas Aplicables a un PBR

El BID requiere que las operaciones que financia, incluyendo el Proyecto, cumplan con aquellas políticas aplicables a los componentes y actividades contempladas en el mismo. Entre estas se encuentran las políticas de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703), Igualdad de Género en el Desarrollo (OP-761), Pueblos Indígenas (OP-765), Reasentamiento Involuntario (OP-710), y Gestión del Riesgo de Desastres Naturales (OP-704).

La Directiva B.13 (Préstamos de Políticas e Instrumentos Flexibles de Préstamo) de la OP-703 establece cómo se aplican las salvaguardias en un PBR e indica que estas operaciones promueven el uso de los sistemas nacionales de seguimiento y evaluación financieros. En estos préstamos, durante la preparación de la operación, el equipo encargado realizará revisiones específicas de los aspectos ambientales y, cuando corresponda, determinará objetivos para el desempeño de salvaguardias, como se detalla a continuación:

- Determinar si es probable que los resultados del proyecto provoquen efectos significativos en los recursos naturales y en el medio ambiente del país, mediante un trabajo analítico adecuado que incluya evaluaciones ambientales y de capacidad.
- En el caso de operaciones que puedan dar lugar a consecuencias ambientales y sociales directas significativas, se incorporarán medidas específicas que garanticen el cumplimiento de las normas y salvaguardias de desempeño ambiental, como, por ejemplo, requerimientos específicos de información y la incorporación de indicadores apropiados que sean aptos para seguimiento posterior.
- El uso de los sistemas nacionales (Directiva B.16) para identificar y controlar los impactos ambientales y sociales en los proyectos o programas financiados en base a resultados debe ser coherente con la iniciativa del Banco de adoptar el uso de los sistemas nacionales de gestión financiera y de adquisiciones.

En cuanto al uso de sistemas nacionales, la Directiva B16 (Sistemas Nacionales) de la OP-703 establece que “en el contexto de operaciones individuales, el Banco considerará la utilización de los sistemas de salvaguardias existentes en el país miembro prestatario para identificar y manejar impactos ambientales y sociales”, indicando además que para tal efecto se deberá llevar a cabo un análisis de equivalencia y aceptabilidad de los sistemas nacionales con respecto a las salvaguardias ambientales y sociales del Banco. Dicho análisis “debe ejecutarse al inicio del ciclo de proyecto, en colaboración con las instituciones del país, a fin de proveer orientación al equipo de proyecto en cuanto a la conveniencia de usar o no el sistema nacional para salvaguardias específicas”. La Directiva B.16 toma en consideración:

- Evaluar si los sistemas nacionales de gestión son equivalentes a los requerimientos del Banco y aceptables en cuanto a su capacidad de aplicación.
- En el caso de vacíos o brechas, determinar si son subsanables y plantear un plan de acción que “contará con una suficiente asignación financiera, y sus requerimientos se integrarán como condiciones en el contrato de préstamo.”
- En los casos en que el análisis de equivalencia y aceptabilidad determine que no se pueden subsanar los vacíos de tipo normativo, procedimental o de desempeño antes de que el prestatario inicie las actividades pertinentes, la operación debe volver a ajustarse a las salvaguardias del Banco, como se determina en las Directivas B.3 a B.11.



- Poner a disposición del público como parte del Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS) del Banco el análisis de equivalencia y aceptabilidad realizado, conforme a la política sobre Disponibilidad de Información (OP-102).
- Cuando sea pertinente, deben especificarse las condiciones de desembolso: “las condiciones contractuales del préstamo incorporarán cualquier requisito que se considere necesario para el uso eficaz de los sistemas nacionales”.

La política del BID establece la aplicación de dos tipos de análisis para evaluar si los sistemas nacionales deben ser utilizados para un proyecto de inversión propuesto: i) el análisis de equivalencia y ii) el análisis de aceptabilidad. El primero se enfoca en la necesidad de que los principios, objetivos y procedimientos clave de las salvaguardas ambientales del prestatario se alineen con los del BID. La equivalencia se refiere a la semejanza entre dos políticas comparadas para un fin específico, tanto en competencias y alcances, como en la eficiencia que se persigue. La equivalencia se evalúa a nivel conceptual, procedimental y funcional.

La aceptabilidad, por otro lado, es una evaluación complementaria destinada a examinar la capacidad de un país/prestatario para aplicar sus propios sistemas, y consta de una revisión de la eficacia del proceso y los procedimientos. El objetivo es determinar si existe suficiente capacidad institucional para cumplir de manera eficaz con las tareas y responsabilidades asignadas. Puede resultar en una aplicación eficiente con la capacidad y competencias de las dependencias gubernamentales de interés o, en su defecto, necesitar la aplicación de medidas adicionales que fortalezcan dichas capacidades. La aceptabilidad puede ser caracterizada a lo largo de un continuo de posibles resultados: un sistema nacional de salvaguardas podría tener ciertos aspectos completamente aceptables, otros que pueden ser aceptables con la incorporación de ciertas medidas destinadas a corregir las brechas, y otros que pueden no ser aceptables.

Para la evaluación del sistema de salvaguardas vinculadas al Proyecto, se ha realizado un análisis de equivalencia y aceptabilidad de los sistemas nacionales de Colombia aplicables al Proyecto, con un enfoque de riesgo. El propósito de la evaluación es determinar si existen riesgos residuales no tratados en los sistemas nacionales y si estos riesgos son aceptables y bajo qué condiciones.

## Evaluaciones Ambientales y Sociales Previas del Programa

Dado que el Programa fue concebido inicialmente como una operación de Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) en su Modalidad Multisectorial I (MM-I) (CO-O0011), en una primera instancia se contrató un servicio de consultoría para el desarrollo de una Evaluación Ambiental y Social Estratégica (EASE), Análisis Ambiental y Social (AAS), y Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para todo el Programa.

En noviembre de 2021 se publicó en la página web del Banco la EASE<sup>3</sup> y el AAS<sup>4</sup>, los cuales incluyen un resumen del marco regulatorio nacional, un análisis de las salvaguardas ambientales y sociales del BID aplicables, una línea base que describe los proyectos y el área en la que se desarrollan, un mapeo de los actores principales de las comunidades involucradas, y una evaluación de impactos, riesgos y oportunidades – tomando en cuenta temas como la igualdad de género – y, finalmente, los planes de mitigación, manejo y monitoreo. Dado que la EASE y el AAS responden a un enfoque y lógica de ejecución distinta a la actual, estos han sido empleados como referencia e insumo para la elaboración de la presente evaluación, aun cuando no constituye un documento válido de evaluación y gestión ambiental y social del Programa, de acuerdo con las políticas y estándares del Banco.

## 1.2 Objetivos

Los objetivos planteados para esta Evaluación de Sistemas Ambientales y Sociales Nacionales de los tres componentes del Programa (el Proyecto) son los siguientes:

<sup>3</sup> <https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-175312708-26>

<sup>4</sup> <https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-175312708-25>

- Realizar un análisis de equivalencia y aceptabilidad de los sistemas nacionales aplicables con relación a las salvaguardias ambientales y sociales del Banco aplicables al Proyecto, con un enfoque de riesgo, en los sectores y actividades que serán financiados por el instrumento de PBR que presentan potenciales riesgos ambientales y sociales.
- Comparar las salvaguardias del BID y del prestatario para identificar brechas críticas, evaluar el riesgo residual en el uso de los sistemas del país, y proponer medidas necesarias para cerrar brechas de aceptabilidad que puedan ser identificadas.

### 1.3 Alcance

El alcance de este estudio sigue la metodología del BID (BID 2017) y abarcó la recopilación de información secundaria sobre la “Programa de Biodiversidad y Equidad Urbana en Barranquilla” y los sistemas de gestión de Colombia. Este análisis se basa en el trabajo realizado para la preparación de la EASE y el AAS del Programa y en el trabajo de campo realizado. Igualmente, el estudio presenta un plan de acción para cerrar las brechas de equivalencia y aceptabilidad encontradas.

## 2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Este programa es un piloto de la iniciativa innovadora de “Ciudades Saludables del BID, la cual busca que los proyectos urbanos consideren los impactos en la salud de sus residentes. Los proyectos considerados dentro del Programa serán en los sectores de construcción e infraestructura, los cuales aportarán en el cumplimiento de Barranquilla en recuperar y proteger su capital natural, aumentar su índice de espacio público y áreas verdes, reducir el consumo energético de la movilidad y equipamientos comunitarios, y potenciar los beneficios de la naturaleza para la salud, bienestar y mitigación de riesgos climáticos.

Los criterios de elegibilidad para la selección de las obras financiadas bajo el Programa incluyen que:

- Contemplan acciones de adaptación y mitigación del cambio climático;
- Promuevan la inclusión en la planeación, diseño y ejecución al incorporar las particularidades socioculturales de los beneficiarios; y
- Sean factibles técnica, institucional, financiera y social ambientalmente.

### 2.1 Componente 1, *Ecosistemas Estratégicos*

El objetivo del Componente 1 del Programa, *Ecosistemas Estratégicos* es promover el uso sostenible de ecosistemas estratégicos. El componente apoya el proceso de recuperación y conservación de los ecosistemas urbano-regionales altamente biodiversos mediante el desarrollo de estudios y proyectos que recuperan e integran áreas ecológicas estratégicas a la red de espacio público urbano. A la fecha de este estudio, se anticipa establecer la infraestructura del Ecoparque Ciénaga de Mallorquín.

### 2.2 Componente 2, *Todos al Parque*

El objetivo del Componente 2 del Programa, *Todos al Parque* es la recuperación, activación y generación de espacio público verde para el Distrito de Barranquilla. Estos predios consisten en parques existentes y bien delimitados y no se anticipa adquisición de predios. La muestra representativa de este Programa está conformada por 11 de las 36 obras, de acuerdo con las tipologías y localización presentadas por el organismo ejecutor. Estos 11 parques se encuentran dispersos en la toda la ciudad y son los siguientes:

- Cancha Nueva Granada
  - Ubicación: Norte de la ciudad
  - Predio: 8.880 m<sup>2</sup>

- Jardín Botánico Fase 2
  - Ubicación: Centro de la ciudad
  - Predio: 60.000 m<sup>2</sup>
- Parque La Alboraya
  - Ubicación: Centro de la ciudad
  - Predio: 1.800 m<sup>2</sup>
- Cancha El Campito 3
  - Ubicación: Centro de la ciudad
  - Predio: 1.000 m<sup>2</sup>
- Parque Bicentenario
  - Ubicación: Oeste de la ciudad
  - Predio: 41.500 m<sup>2</sup>
- Parque Tayrona
  - Ubicación: Centro de la ciudad
  - Predio: 4.400 m<sup>2</sup>
- Parque La Solución
  - Ubicación: Centro de la ciudad
  - Predio: 4.800 m<sup>2</sup>
- Parque Bulevar Santa Elena
  - Ubicación: Este de la ciudad
  - Predio: 3.200 m<sup>2</sup>
- Parque Virgencita de Los Trupillos
  - Ubicación: Este de la ciudad
  - Predio: 1.200 m<sup>2</sup>
- Parque Los Trupillos
  - Ubicación: Este de la ciudad
  - Predio: 4.300 m<sup>2</sup>
- Parque Los Trupillos 2
  - Ubicación: Este de la ciudad
  - Predio: 4.200 m<sup>2</sup>

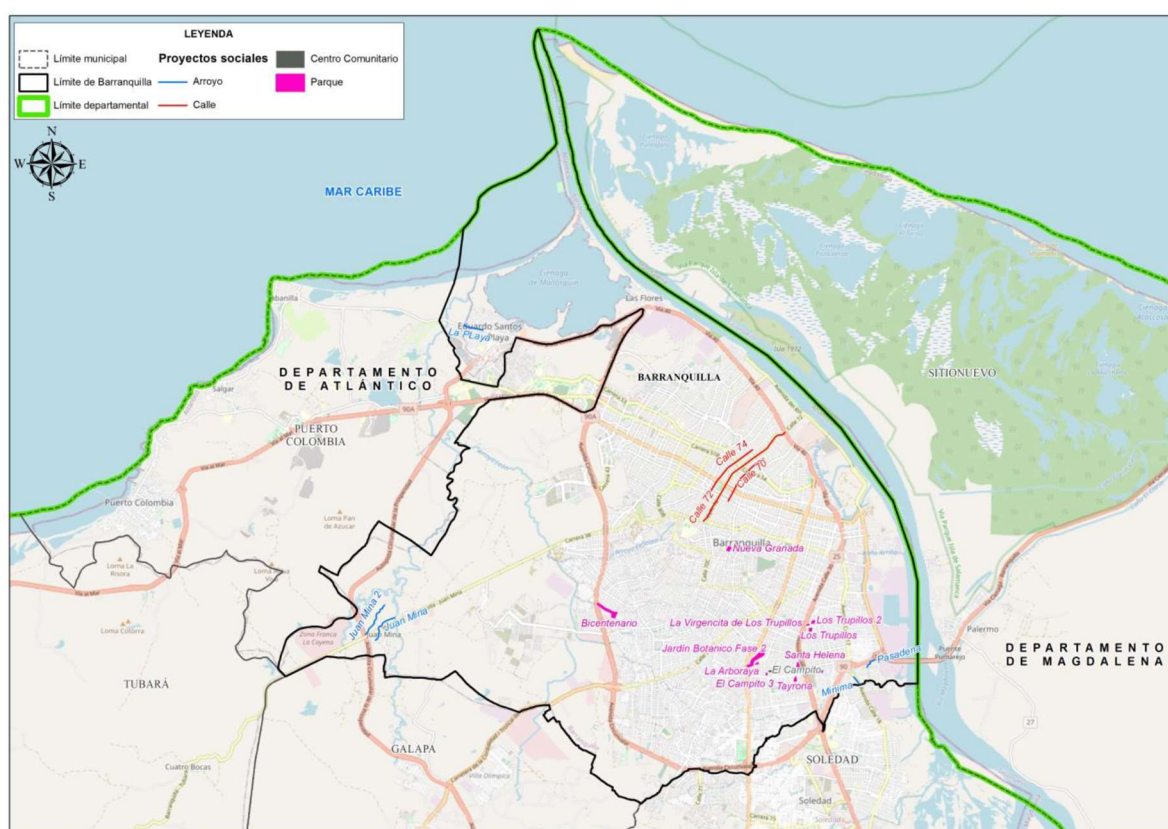
Los diseños de los parques cuentan con lo siguiente:

- Senderos peatonales, tratados con materiales duros y antideslizantes, que garanticen la accesibilidad y continuidad en sus recorridos,
- Facilitar el uso y desplazamiento por personas en condición de discapacidad (con rampas y vados, de tamaños y pendientes adecuadas, juegos y equipos accesibles),
- Sistemas de manejo de aguas pluviales,
- Franjas táctiles de guía y de alerta para los invidentes,

- Zonas donde abunde la arborización y el césped: una cobertura arbórea de mínimo el 70% de su área total, de la cual, mínimo el 50% deberá ser de follaje perenne,
- La conservación de los árboles existentes, monumentos y aspectos simbólicos del sector y de la comunidad reflejados en el territorio.
- La implementación del mismo mobiliario en los proyectos de todas las localidades (por ejemplo, las mismas texturas, bancas, postes de iluminación de gran calidad y juegos). Esta consistencia de diseño le da unidad al conjunto de intervenciones, simplifica su mantenimiento y materializa el objetivo de tratar con igual importancia las diferentes partes de la ciudad.

Los Proyectos del Componente 2 están ubicados dispersados por la ciudad de Barranquilla.

**Figura 2-1: Ubicación de los Proyectos del Componente 2**



## 2.3 Componente 3, Ciudad Equitativa

El objetivo del Componente 3 del Programa, Ciudad Equitativa es promover la equidad urbana aumentando el acceso a equipamientos sociales inclusivos y que sean ecoeficientes<sup>5</sup>. Para ello, se anticipa que se llevará acabo el desarrollo de infraestructura recreativa resiliente y programas de integración socioeconómica dirigidos a grupos vulnerables. Asimismo, con la donación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) se financiará: (i) la adecuación y puesta en marcha de un nuevo Centro de Integración Local para Migrantes (CILM) como un lugar intercultural de integración de población migrante con espacios inclusivos y servicios para su regularización y metas específicas para mujeres migrantes<sup>6</sup>; (ii) el desarrollo de programas de certificación de competencias laborales y de incorporación laboral bajo las rutas de empleabilidad y

<sup>5</sup> Se certificará la ecoeficiencia de los diseños y construcciones de los dos centros comunitarios y el CILM a través del programa Excellence In Design for Greater Efficiencies (EDGE, por sus siglas en inglés) de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés).

<sup>6</sup> En el marco de la implementación del Estatuto Temporal de Protección al Migrante Venezolano (ETPMV).

desarrollo productivo a cargo del Centro de Oportunidades de Barranquilla incluyendo las necesidades de cuidado de las mujeres y sus brechas laborales<sup>7</sup>; (iii) el fortalecimiento de la Escuela Taller de Barranquilla con adecuaciones complementarias para ampliar la capacitación de jóvenes entre 15 y 30 años de edad en oficios tradicionales a definir por la demanda de oportunidades de generación de ingresos<sup>8</sup>; (iv) la expansión del Programa Sacúdete en áreas receptoras de migrantes y otorgando becas para adolescentes y jóvenes vulnerables; y (v) el desarrollo de una estrategia para la promoción de espacios públicos seguros con perspectiva de género.

### 3. METODOLOGÍA

Para evaluar los sistemas nacionales ambientales y sociales de Colombia, con relación a su equivalencia y aceptabilidad con las políticas de salvaguardas ambientales y sociales del BID, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Recopilación y revisión de información
2. Evaluación de los Riesgos
3. Análisis de Equivalencia
4. Análisis de Aceptabilidad
5. Preparación del Plan de Acción

#### 3.1 Recopilación y Revisión de Información

Se revisaron las políticas de salvaguardas ambientales y sociales del BID, las normativas ambientales y de recursos naturales de Colombia; así como también información disponible sobre el Programa, como las competencias y atribuciones de los sectores de construcción e infraestructura.

#### 3.2 Análisis de Impactos y Riesgos

El principal objetivo de clasificar los riesgos antes de que se desarrolle una actividad es advertir y tomar acciones para evitar que una amenaza se traduzca en un impacto. De acuerdo a la metodología del BID, se utilizó una clasificación del riesgo que incluyó los siguientes cinco tipos de riesgos e impactos:

- Impactos ambientales y sociales: incluye impactos ambientales y/o sociales directos o indirectos, que pueden ocurrir en cualquier momento durante el ciclo de vida de las actividades del Proyecto. Por lo general, se consideran las implicaciones físicas directas, como el desmonte de la vegetación, la seguridad del trabajador, cambio en el uso del suelo, el aumento de la contaminación del aire y del agua, riesgos relacionados con la alta proporción de personas indocumentadas y/o sin tierra, con la discriminación de la mujer en los beneficios del Proyecto, impactos sobre los medios de subsistencia, entre otros.
- Riesgos contextuales: se refieren a riesgos que pueden estar presentes en las áreas específicas en las que se implementan las actividades del Proyecto y exacerbar los impactos probables o generar ciertos problemas especiales de gestión localizados que tal vez deban tenerse en cuenta. Por ejemplo, ¿se están desarrollando actividades cerca de áreas protegidas? ¿Hay valores ambientales o paisajísticos locales, regionales o nacionales en riesgo por las actividades del Proyecto? Los riesgos contextuales también pueden incluir el objetivo o el propósito del proyecto en sí. En algunos casos, el proyecto puede tener como objetivo resolver un tema controvertido o puede que la solución propuesta cree nuevos problemas.

<sup>7</sup> Esta actividad incluirá apoyo a mujeres con cuidado infantil y un modelo de atención en campo para llegar a un mayor número de migrantes. Adicionalmente, se articulará al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

<sup>8</sup> Complementa el Programa de Integración Sociourbana de Migrantes en Ciudades Colombianas (CO-G1015; GRT/ER 17925 CO) donde el Ministerio de Cultura establecerá la primera Escuela Taller de Barranquilla. Al final de su ciclo formativo, los egresados de las Escuelas Taller se convierten en emprendedores que ven el patrimonio cultural como una fuente de desarrollo local y se llevan una formación integral. Se han identificado potenciales de formación en temática de carnaval, costura, turismo, trabajo en metal, bisutería, entre otros.



- **Riesgos de sostenibilidad:** considera factores con posibilidades de afectar la viabilidad ambiental o social de largo plazo de las inversiones sectoriales. Por ejemplo, ¿hay factores externos a las actividades del Proyecto con capacidad para perjudicar los resultados ambientales exitosos? ¿Hay peligro de que surjan impactos acumulativos no deseados en una zona afectada por el Proyecto?
- **Riesgos institucionales:** contemplan el grado en que las limitaciones de la capacidad de ejecución o la complejidad de los arreglos institucionales pueden provocar riesgos para la implementación exitosa de las actividades sectoriales. Este grupo debe incluir las limitaciones de la capacidad institucional en el presente, pero también en el futuro. ¿Son muy complejos los arreglos institucionales? ¿Las agencias entienden sus roles y responsabilidades?
- **Riesgos reputacionales y políticos:** abarcan factores que pueden influir negativamente en la aceptación social de las actividades del Proyecto. ¿Es probable que haya intereses encontrados en relación con las metas y los objetivos del Proyecto? ¿Hay posibilidades de favoritismo, real o percibido, en la distribución de beneficios del Proyecto? ¿Es factible que las partes interesadas expresen sus preocupaciones o presenten quejas contra los organismos competentes o el BID?

La significancia del impacto o riesgo se estableció en función de la magnitud del mismo y la sensibilidad del receptor afectado según la siguiente matriz:

Matriz de la Significancia de Impactos		Sensibilidad/Vulnerabilidad/Importancia del Recurso/Receptor		
		<i>Baja</i>	<i>Media</i>	<i>Alta</i>
<b>Magnitud del Impacto</b>	Insignificante	Insignificante	Insignificante	Insignificante
	Bajo	Insignificante	Menor	Moderado
	Medio	Menor	Moderado	Mayor
	Alto	Moderado	Mayor	Mayor
Impactos Positivos				
Magnitud el Impacto	N/A	Positivo	Positivo	Positivo

En una primera instancia se identificaron y calificaron los riesgos potenciales derivados de las actividades del Proyecto sin considerar medidas de mitigación ni la aplicación de salvaguardas y/o sistemas nacionales. Posteriormente, se re-evaluó la significancia de los riesgos potenciales considerando la aplicación de los sistemas nacionales existentes para gestionar dichos riesgos, y el nivel de equivalencia y aceptabilidad de los mismos con las políticas del Banco.

### 3.3 Análisis de Equivalencia

El análisis de equivalencia compara el conjunto de leyes, normas, estándares y procedimientos de fiscalización nacional con los requisitos de salvaguardia del Banco que son aplicables al Proyecto. Para cada salvaguardia específica, se considera que el sistema nacional de un país es equivalente si éste cumple los mismos objetivos y se ciñe a los principios operacionales pertinentes asociados a la salvaguardia en cuestión, de conformidad con los lineamientos del BID. Para este Proyecto, se evaluó el conjunto de leyes, reglamentos, instituciones y procedimientos de gestión ambiental y social que aplican en Colombia a proyectos de Biodiversidad y Equidad Urbana y que corresponden a los requerimientos de salvaguardias aplicables del Banco. Por ejemplo, el análisis de equivalencia del sistema nacional en cuanto a prevención y reducción de la contaminación consistió en la revisión de las leyes y reglamentos aplicables de prevención de la contaminación del país en el contexto del

Proyecto y su comparación con los requerimientos de la Directiva B.11 del BID. Las salvaguardias del Banco aplicables a este Proyecto son las siguientes:

- OP-703. Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas, y las siguientes directivas:
  - B.2. Legislación y Regulaciones Nacionales
  - B.5. Requisitos de evaluación ambiental.
  - B.6. Consultas y requisitos de disponibilidad de información.
  - B.7. Supervisión y cumplimiento.
  - B.9. Hábitats naturales y sitios culturales.
  - B.10. Materiales peligrosos
  - B.11. Prevención y reducción de la contaminación
  - OP-102. Política de acceso a la información
  - OP-704. Política sobre gestión de riesgos de desastres
  - OP-761. Política operativa sobre igualdad de género

La equivalencia puede responder a diferentes variantes, ya sean conceptuales o ideales, procedimentales o metodológicas y funcionales o prácticas:

- Equivalencia conceptual o ideal: se refiere a la semejanza literal entre dos políticas comparadas; en este caso, responde a la analogía entre los objetivos y principios de los sistemas ambientales y sociales de Colombia y las políticas del BID, en materia de evaluación ambiental, consultas públicas, hábitats naturales, sitios culturales y género, entre otras.
- Equivalencia procedimental o metodológica: se refiere a la semejanza de la aplicación entre una política y las regulaciones nacionales correspondientes; es decir, a la similitud de los procesos y métodos que se siguen para cumplir los objetivos.
- Equivalencia funcional o práctica: se refiere a la semejanza que se pueda dar entre los resultados obtenidos en la aplicación de las políticas, aunque no necesariamente obedezca a los mismos objetivos y principios establecidos o procesos y métodos seguidos.

### 3.4 Análisis de Aceptabilidad

El análisis de aceptabilidad se enfoca en las prácticas de aplicación, historial de desempeño y capacidad de las instituciones nacionales pertinentes para poner en práctica, hacer cumplir y aplicar los principios operativos de salvaguardia.

La aceptabilidad de los sistemas nacionales de salvaguardas ambientales y sociales se refiere a la eficiencia del país para responder a los objetivos y principios de las políticas ambientales y sociales establecidas por el BID. Puede resultar en una aplicación eficiente con la capacidad y competencias de las dependencias gubernamentales de interés o, en su defecto, puede necesitar la aplicación de medidas adicionales que fortalezcan dichas capacidades. Para caracterizar la aceptabilidad, es necesario tomar en consideración:

- la calidad, consistencia y fiabilidad de los sistemas de gestión de riesgos,
- la adecuación de los recursos financieros y humanos para llevar a cabo las tareas,
- si hay un historial probado en el manejo de los riesgos identificados,
- si existe suficiente transparencia en los procesos de gestión, y
- la eficacia y el alcance del compromiso de las partes interesadas.

La aceptabilidad se clasifica en las siguientes tres categorías:

- **Aceptabilidad Sin Condiciones.** Se refiere a la compatibilidad de las políticas nacionales con las políticas del BID, con la sola aplicación de los mecanismos considerados en el marco regulatorio, particularmente en las reglas de operación de los programas de interés.
- **Aceptabilidad Condicionada.** Se refiere a la identificación de brechas o debilidades que podrían poner en riesgo el desarrollo de una actividad; por lo tanto, es necesario acordar medidas adicionales que fortalezcan los aspectos ambientales y sociales asociados a la misma.
- **No Aceptabilidad.** Se refiere a la existencia de brechas significativas que solo se pueden cerrar con la aplicación directa de las políticas del Banco.

Para el análisis de aceptabilidad se seleccionaron dos proyectos específicos los cuales se emplearon como ejemplos para analizar la aceptabilidad: *Parque Bicentenario* y *Parque Los Trupillos*. Estos proyectos fueron seleccionados para representar proyectos que se encuentran avanzados a fin de evaluar su desempeño en la implementación de los sistemas nacionales.

Finalmente, se aplicaron los resultados del análisis de equivalencia y aceptabilidad para identificar las principales brechas entre el sistema nacional de Colombia y las salvaguardas del BID. En este paso final, se desarrolló un plan de acción con las medidas e indicadores de desempeño para cerrar cada una de las brechas.

## 4. ANÁLISIS DE RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

### 4.1 Riesgos e Impactos del Componente 1 del Programa, Ecosistemas Estratégicos

Los posibles impactos ambientales y sociales potenciales serían principalmente, aquellos localizados y temporales asociados a trabajos de construcción de infraestructura del Ecoparque Ciénaga de Mallorquín; para los cuales existen medidas de mitigación típicas de la industria.

### 4.2 Riesgos e Impactos del Componente 2 del Programa, Todos al Parque

La recuperación de los parques urbanos y periurbanos puede generar ciertos impactos ambientales y sociales negativos, así como también representa riesgos contextuales, de sostenibilidad e institucional. Todos ellos deberán ser mitigados de manera adecuada, con fin de minimizar los impactos negativos y maximizar los impactos positivos.

De acuerdo con el AAS y la EASE, los posibles impactos ambientales y sociales potenciales significativos identificados son los siguientes:

- **Desplazamiento económico** a causa de las actividades de construcción que puedan interrumpir las actividades comerciales formales e informales. Para parques, se afectará el parqueador en Parque Alboraya y el quiosco de ventas en Parque La Solución. Si ocurre desplazamiento económico y afectaciones a medios de vida, es importante resaltar que todas estas personas deberán ser compensadas. Dada la magnitud de negocios que se encuentran en la zona, será necesario habilitar accesos durante las obras para evitar la interrupción de las actividades económicas que se llevan a cabo en la zona.
- **Inseguridad para las mujeres** durante la fase de construcción. Los empleos suelen beneficiar más a los hombres que a las mujeres. Además, los proyectos de construcción pueden generar inseguridad para las mujeres, que pueden ser acosadas por los trabajadores.

Asimismo, se han identificado los siguientes impactos los cuales son localizados y temporales, típicos de obras de construcción en áreas urbanas y para los cuales existen medidas de mitigación típicas de la industria:



- Emisiones de combustión y polvo de las actividades de construcción y movimiento de vehículos y maquinaria pesada sobre superficies sin pavimentar. El potencial de emisiones de polvo es mayor durante épocas de clima seco y ventoso y menor durante la temporada de lluvias.
- Aumento de los niveles de ruido por el uso de maquinaria y equipos de construcción. Durante la fase de operación, no se anticipan incrementos de niveles de ruido para ninguno de los Proyectos de la muestra.
- Contaminación o reducción de la calidad de agua a causa de las siguientes actividades que pueden impactar la calidad de agua y los recursos hídricos de la zona: (i) alteración de los patrones de escurrimiento y características de drenaje y rendimiento de la cuenca; (ii) aumento de la carga de sedimentos; (iii) baños portátiles; y, (iv) desechos de las actividades de construcción y desechos de equipos.
- El potencial de erosión y contaminación del suelo durante la fase de construcción aumente debido a las siguientes actividades: (i) actividades de nivelación y movimiento físico de tierras; (ii) manejo de residuos sólidos y líquidos; y, (iv) manejo de materiales peligrosos.

### 4.3 Riesgos e Impactos del Componente 3 del Programa, Ciudad Equitativa

La construcción, adecuación y operación de los centros comunitarios multifuncionales y la recuperación de parques, plazas, áreas verdes y espacios públicos puede generar los siguientes impactos ambientales y sociales potenciales significativos:

- Desplazamiento económico debido a que los proyectos se encuentran dentro de la ciudad de Barranquilla, la cual es densamente poblada y donde se encuentran receptores comerciales y residenciales. Por lo tanto, es importante desarrollar medidas para mitigar el posible impacto causado por la interrupción temporal de las actividades comerciales formales e informales.
- Discriminación en contra de grupos vulnerables<sup>9</sup> debido a la falta de oportunidades de empleo durante la etapa de construcción a personas en posición de vulnerabilidad ya que a menudo no tienen las capacitaciones necesarias para trabajar en los proyectos de construcción, además de tener que superar obstáculos sociales para acceder a estos puestos. Asimismo, se reconoce que los proyectos de construcción pueden generar inseguridad a los grupos vulnerables que pueden sufrir acoso de los trabajadores.
- Aquellos localizados y temporales asociados a trabajos de construcción, adecuación y operación de centros comunitarios multifuncionales, parques, plazas, áreas verdes y espacios públicos, para los cuales existen medidas de mitigación típicas de la industria.

Finalmente, también existe el riesgo de daños a la infraestructura, equipos y salud y seguridad por inundaciones. Particularmente, las inundaciones podrían afectar las actividades de construcción y podrían resultar en daños a los tres componentes del Proyecto (por ejemplo, daños a los sitios y equipos de construcción). Según la información evaluada, algunos de los parques se encuentran en zonas donde hay mayor riesgo a inundaciones y deslizamientos, causados principalmente por las deficiencias en los sistemas de drenaje.

## 5. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS

A nivel nacional, el Proyecto se regirá por un marco jurídico y normativo que definirá los requerimientos legales necesarios para su adecuado desarrollo. A nivel internacional, el Programa se regirá por un

<sup>9</sup> La clasificación de grupos vulnerables para los proyectos incluye, pero no se limita, a: (i) Personas sin hogar; (ii) Personas en situación de pobreza; (iii) Personas con discapacidad; (iv) Personas mayores; (v) Personas en situación de dependencia; (vi) Personas inmigrantes (con particular atención a la población venezolana) y personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional; (vii) Personas víctimas de discriminación por origen racial o étnico, orientación sexual o identidad de género (poblaciones indígenas, mujeres, miembros de LGBTQ+); y (viii) Personas reclusas o ex-reclusas.

marco de acuerdos que el Gobierno de Colombia ha firmado y ratificado. Esta sección identifica y resume dichos marcos regulatorios, los cuales corresponden al sistema nacional de gestión de riesgos.

## 5.1 Marco Normativo Aplicable Orientado a La Gestión de los Riesgos Identificados

El Programa debe cumplir con las siguientes regulaciones, leyes y normas nacionales e internacionales.

### 5.1.1 Leyes y Normativas Aplicables

#### 5.1.1.1 Constitución Política de 1991 de Colombia

- Artículo 8: Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.
- Artículo 58: La propiedad es una función social que implica obligaciones, como tal le es inherente una función ecológica.
- Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado protegerla diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
- Artículo 80: Establece la obligación del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible y su conservación, restauración o sustitución; además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.
- Artículo 82: Es deber del estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común el cual prevalece sobre el interés particular.

#### 5.1.1.2 Licenciamiento y Control Ambiental

La Ley No. 99 de 1993, del Congreso de Colombia, estableció los fundamentos de la Política Ambiental Colombiana, crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el sector público encargado de la gestión y conservación de medio ambiente y de los recursos naturales renovables y establece el marco para el otorgamiento de licencias ambientales y la aplicación de la ley ambiental en Colombia. Dicha Ley reorganizó las responsabilidades para la regulación ambiental entre autoridades nacionales, regionales y ciertas autoridades municipales, creó el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y reconoció a los estudios de impacto ambiental como el instrumento fundamental para la toma de decisiones en relación con actividades que afectan significativamente el medio ambiente. El artículo 49 de la Ley 99 estableció la obligatoriedad de la licencia ambiental para la ejecución de cualquier obra, industria o actividad que pueda causar daños graves o cambios en el medio ambiente o los recursos naturales antes de comenzar a trabajar en la actividad. La Ley 99 además estipuló que la obtención de una licencia ambiental somete al licenciatario a un conjunto de obligaciones legales con respecto a prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos ambientales de la actividad autorizada. Finalmente, el Título XII de la Ley 99 instituyó un régimen de sanciones ambientales que deben ser aplicados en caso de incumplimiento.

Desde la adopción de la Ley 99 de 1993, se ha desarrollado un importante cuerpo legislativo y marco regulatorio de varios aspectos para proporcionar una mayor especificidad con respecto a los requisitos legales del proceso de Evaluación del Impacto Ambiental y Social (EIAS), así como para las cuestiones de concesión de licencias y su cumplimiento.

- Decreto 3573 de 2011, de la Presidencia de la República de Colombia, creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, con el objeto de ser la

encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del País.

- Decreto 1076 de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, corresponde al Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, que compila las disposiciones reglamentarias de este sector. En el tema de licenciamiento ambiental, señala los proyectos, obras o actividades que están sujetos a licencia ambiental previa para su ejecución, que corresponden a los listados en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto. Igualmente, precisa que dichos proyectos y aquellos que están obligados al establecimiento de plan de manejo ambiental están sujetos a control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales.
- La Ley 1333 de 2009, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS), estableció el procedimiento sancionatorio ambiental para Colombia un conjunto elaborado de reglas para imponer sanciones en casos de violaciones ambientales.
- Decreto 2041 de 2014 reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. Señala las definiciones para su interpretación; establece el alcance y concepto de la licencia ambiental, competencia, normas sobre estudios ambientales, diagnóstico ambiental de alternativas (DAA), estudio de impacto ambiental (EIA), el trámite de licenciamiento, modificación, cesión y pérdida de vigencia de la licencia ambiental, control y seguimiento ambiental, acceso a información ambiental, entre otras disposiciones.

### 5.1.1.3 Protección y Conservación de la Biodiversidad

- Resolución 1912 de 2017, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS, establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la biodiversidad biológica colombiana continental y marino costera, que se encuentran en el territorio nacional
- Resolución 383 de 2010, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS), por el cual se declaran las especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio nacional
- Resolución 0848 de 2008, modificado por la Resolución 0207 de 2010, la cual fue aclarada por la resolución 0976 de 2010, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS), se declaran unas especies exóticas como invasoras y se establece la prohibición de introducción al país
- Resolución 2064 de 2010, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS), por el cual se reglamentan las medidas posteriores a la aprehensión preventiva, restitución o decomiso de especímenes de especies silvestres, de fauna y flora terrestre y acuática. Además, reglamenta el portal de información sobre fauna silvestre –PIFS.
- Decreto 2811 de 1974, de la Presidencia de la República de Colombia, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de protección al ambiente.
- Decreto 1608 de 1978, de la Presidencia de la República de Colombia, por el cual se reglamenta el Decreto 2811 de 1974, en materia de fauna silvestre. Está incluido en el Decreto 1076 de 2015.
- Decreto 1681 de 1978, de la Presidencia de la República de Colombia, por el cual se reglamenta el Decreto 2811 de 1974, en materia de Recursos hidrobiológicos. Incluido en el Decreto 1076 de 2015

#### 5.1.1.4 Participación Ciudadana

Colombia tiene un extenso marco legal para garantizar la participación de los ciudadanos en programas y proyectos de desarrollo:

- La Ley 134 de 1994 regula los procesos de participación ciudadana en instrumentos legislativos, incluyendo referendos.
- La Ley 743 de 2002 (Organización Comunal) tiene como objetivo promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización democrática, moderna, participativa y representativa en los organismos de acción comunal en sus respectivos grados asociativos y a la vez, pretende establecer un marco jurídico claro para sus relaciones con el Estado y con los particulares, así como para el cabal ejercicio de derechos y deberes.
- El Decreto 1320 de 1998 reglamenta la consulta previa con comunidades indígenas y negras con relación a proyectos a ser implementados por terceras partes en sus territorios.

#### 5.1.1.5 Consulta Previa con Comunidades Indígenas Tradicionales y Negras

Bajo la ley colombiana, cuando un proyecto, trabajo o actividad que involucra la extracción de recursos naturales se propone en un área habitada por comunidades indígenas o negras tradicionales (descendientes de esclavos africanos), se debe seguir un proceso riguroso de consulta previa. Colombia es signataria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, que el país aprobó mediante la aprobación de la Ley 21 en 1991, así como de la Declaración de las Naciones Unidas (2007) sobre los derechos de los pueblos indígenas. El requisito de consulta previa también se incluye en la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece en el Artículo 330 que “la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se llevará a cabo sin menoscabo de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas” y establece que el gobierno fomentará la participación de representantes de las comunidades indígenas en las decisiones que se adopten con respecto a esta explotación. Las medidas para evitar y mitigar los impactos perjudiciales que resultan del proceso de consulta previa, una vez que se aprueban, se convierten en obligaciones de desempeño que deben ser monitoreadas y ejecutadas.

La consulta previa con las comunidades indígenas y negras es supervisada por el Ministerio del Interior a través de su Dirección de Consulta Previa y se diferencia en muchos aspectos del proceso de consulta pública (*consulta popular*) que se exige para los proyectos propuestos en la mayoría de las demás circunstancias. El proceso procesal para la consulta previa requiere que los proponentes del proyecto participen en al menos tres eventos consultivos antes de que puedan iniciar el proceso de EIAS.

- Decreto 1320 de 1998, reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio, establece que estas comunidades deben tener la oportunidad de participar de manera activa y efectiva en la preparación de los estudios de EIAS, a través de la contribución de los aportes que informan sobre la elaboración de estos documentos.
- Artículo 330, Parágrafo, de la Constitución Política de Colombia: La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas.
- Ley 21 de 1991, “Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independiente”.
- Ley 70 de 1993: “Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política, mediante la cual se reconoce a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos” (Art 22, 38 y 58).

- Decreto 1066 de 2015, del Ministerio del Interior, corresponde al Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior. Establece la competencia exclusiva de certificación de presencia de comunidades étnicas para consultas previas, y Protocolo de coordinación interinstitucional para la Consulta Previa.
- Directiva 08 de 2020 de la Presidencia de la República en relación a la Guía para la realización de la Consulta Previa y su procedencia.

Adicional a lo anterior, en relación al uso del suelo en el país, el decreto 1076 de 2015 (Título 2- Capítulo 1) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS, 2015), establece las Áreas de manejo especial y reglamenta el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y los procedimientos generales relacionados con este, entre las cuales se encuentran: las áreas protegidas, los ecosistemas ambientales sensibles y los ecosistemas estratégicos.

El tal sentido, se cuenta con restricciones ambientales específicas para el uso del territorio acorde con la categoría, zonificación, usos permitidos control y vigilancia, entre otros. Igualmente, la Ley 1333 de 2009 contiene las disposiciones sancionatorias por incumplimiento, y el Código Penal lo referente a los delitos contra los recursos naturales.

#### 5.1.1.6 Equidad de Género

La legislación colombiana ratifica las normas, medidas y acuerdos establecidos en mecanismos de las Naciones Unidas como son: el Convenio Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el Instituto Internacional de Investigación y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW). Los artículos 9: “No discriminación en materia de empleo”, 10: “Igualdad de Remuneración entre los trabajadores” y 143: “A trabajo Igual Salario Igual” del Código Sustantivo de Trabajo muestran los avances en igualdad de género en materia de empleo.

La Ley 82 de 1993 apoya a la mujer cabeza de familia para brindarle mejores condiciones de acceso al crédito, educación, empleo, vivienda y microempresa, entre otros. La ley 509 de 1999, promueve beneficios en materia de seguridad social y subsidios a las madres comunitarias, mientras la ley 590 de 2000 establece normas sobre el trato especial a las mujeres.

Por medio de la Ley 1009 de 2006 se creó el Observatorio de Asuntos entre Género (OAG) como mecanismo de seguimiento al cumplimiento de normas nacionales e internacionales vigentes y las políticas públicas, planes y programas, relacionados con la equidad de las mujeres, a fin de conocer el impacto diferenciado que tiene entre hombres y mujeres, con el objeto de hacer recomendaciones que contribuyan a eliminar las discriminaciones y a superar las inequidades de género que se presentan en el país.

La Ley 1257 de 2008 dicta normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la ley 294 de 1996 y otras disposiciones.

La Ley 1761 de 2015, la cual tiene por objeto tipificar el feminicidio como un delito autónomo, para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana en orden a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias que favorezca su desarrollo integral y su bienestar, de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación.

- En el CONPES 2013 -2016 se presenta la Política Pública Nacional de Equidad de Género.

En relación con la autonomía económica y física el gobierno nacional ha emitido normas recientes relacionadas con la equidad de género, tales como:

- Ley 1773 de 2016, Modifica el Código Penal. Tipifica el delito de lesiones con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares.

- Ley 1822 de 2017, Incentiva la adecuada atención y cuidado de la primera infancia, se modifican los artículos 236 y 239 del código sustantivo del trabajo y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1823 de 2017, Adopta la estrategia Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral en entidades públicas y empresas privadas de conformidad con el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo. El uso de estas salas no exime al empleador de reconocer y garantizar el disfrute de la hora de lactancia, la madre lactante podrá hacer uso de la misma o desplazarse a su lugar de residencia, o ejercerlo en su lugar de trabajo
- Ley 1822 de 2017, Incentiva la adecuada atención y cuidado de la primera infancia, se modifican los artículos 236 y 239 del código sustantivo del trabajo y se dictan otras disposiciones. La licencia de maternidad se aumentó a dieciocho (18) semanas, siendo en condiciones normales una (1) semana antes del parto y diecisiete (17) semanas posteriores a éste. Además, el esposo o compañero permanente tendrá derecho a ocho (8) días hábiles de licencia remunerada de paternidad.

Además, a partir de la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento de la Corte Constitucional, la Corte Constitucional ha presentado diferentes pronunciamientos frente a la necesidad del diseño y aplicación de políticas públicas con enfoque diferencial, que permitan el reconocimiento y la atención de particularidades y características propias de los diversos sectores de la población.

#### 5.1.1.7 Adquisición de Tierras y Servidumbres

La Ley 1682 de 2013, por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias, establece que, como parte de la planificación de un proyecto, se deberá llevar a cabo un diagnóstico predial o análisis de predios objeto de adquisición. El Título IV establece los lineamientos para la gestión y adquisición prediales, gestión ambiental, activos y redes de servicios públicos, de TIC y de la industria del petróleo, entre otros y permisos mineros y servidumbres. En cuanto a adquisición, se establece que la adquisición predial es responsabilidad del Estado y para ello la entidad pública responsable del proyecto podrá adelantar la expropiación administrativa con fundamento en el motivo definido en el artículo anterior, siguiendo para el efecto los procedimientos previstos en las Leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997, o la expropiación judicial con fundamento en el mismo motivo, de conformidad con lo previsto en las Leyes 9ª de 1989, 388 de 1997 y 1564 de 2012. En todos los casos de expropiación, incluyendo los procesos de adquisición predial en curso, deben aplicarse las reglas especiales previstas en la Ley 1682 de 2013. El Artículo 27 expone que en el proceso administrativo, en caso de no haberse pactado el permiso de intervención voluntario del inmueble objeto de adquisición o expropiación, dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que la dispuso, la entidad interesada solicitará a la respectiva autoridad de policía, la práctica de la diligencia de desalojo, que deberá realizarse con el concurso de esta última y con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y/o el personero municipal quien deberá garantizar la protección de los derechos humanos, dentro de un término perentorio de cinco (5) días, de la diligencia, se levantará un acta y en ella no procederá oposición alguna. El precio de adquisición será igual al valor comercial, determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley número 2150 de 1995 y de conformidad con las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos que sean fijados por el IGAC. El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir, su destinación económica, el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente incluirá el valor del inmueble y el lucro cesante se calculará según los rendimientos reales del inmueble al momento de la adquisición y hasta por un término de seis (6) meses.

- Además, en cuanto a la ocupación del espacio público, la ley 722-2003 da el reconocimiento al principio de la confianza legítima, y el Distrito de Barranquilla se rige bajo estos parámetros para los ocupantes que se encuentran ejerciendo actividad comercial dentro de espacios públicos.



- Por último, en cuanto a la presencia de personas sin hogar, el Distrito de Barranquilla se rige mediante la política pública ley 1641 de 2013, “por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle”, buscando garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos de estas personas, con el propósito de lograr su atención integral, rehabilitación e inclusión social.

#### 5.1.1.8 Patrimonio Cultural

Los proponentes de proyectos que contemplan emprender una actividad en cualquier parte de Colombia deben tener en cuenta, dentro del proceso de planificación, la posibilidad de que existan sitios y artefactos arqueológicos y culturales en el sitio del proyecto propuesto. Bajo la ley colombiana, los proponentes, a través del uso de expertos consultores arqueológicos, deben conducir proactivamente un estudio científico obligatorio de artefactos y sitios arqueológicos potenciales. La principal herramienta para este análisis es el Programa Arqueológico Preventivo (PAP)

El Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP, es el instrumento de planeación y gestión del Patrimonio Cultural de la Nación, mediante el cual se establecen las acciones necesarias con el objetivo de garantizar la protección, conservación y sostenibilidad de los Bienes de Interés Cultural (BIC) o de los bienes que pretendan declararse como tales si a juicio de la autoridad competente dicho Plan se requiere, en el marco de lo establecido por el Decreto 763 de 2009. Los PEMP como instrumento del Régimen Especial de Protección de los BIC, deben:

- Definir las condiciones para la articulación de los bienes con su contexto físico, arquitectónico, urbano o rural, los planes preexistentes y su entorno sociocultural, partiendo de la conservación de sus valores, la mitigación de sus riesgos y el aprovechamiento de sus potencialidades.
- Precisar las acciones de protección de carácter preventivo y/o correctivo que sean necesarias para la conservación de los bienes.
- Establecer las condiciones físicas, de mantenimiento y de conservación de los bienes.
- Establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y sostenibilidad de los bienes.
- Generar las condiciones y estrategias para el mejor conocimiento y la apropiación de los bienes por parte de la comunidad, con el fin de garantizar su conservación y su transmisión a futuras generaciones” (Ministerio de Cultura).

El PEMP de los barrios de El Prado, Bellavista y parte de Alto Prado es un instrumento que garantizará la protección de 1.924 inmuebles (39 Nivel 1-conservación integral; 1603 Nivel 2 -conservación de tipo arquitectónico, y 282 Nivel 3 -contextual), que están ubicados en un área protegida de 93 manzanas (314 hectáreas), como lo explicó el secretario de Planeación Distrital, Juan Manuel Alvarado. Además de los inmuebles, cubrirá 14 bienes muebles en espacio público, entre ellos los monumentos de Cristóbal Colón, George Washington, Francisco de Paula Santander, el Monumento a la Bandera y el mural ‘Tierra Mar Aire’, del maestro Alejandro Obregón e igualmente protegerá 37 especies de árboles, entre frutales y ornamentales tales como el guayacán, la ceiba y el laurel consideradas como patrimonio ecológico de la ciudad de Barranquilla.

La tabla a continuación presenta las normas aplicables al programa para la protección del Patrimonio Cultural.

**Tabla 5-1 Marco Legal Aplicable- Patrimonio Cultural**

Normatividad	Aspecto Regulado
Constitución Política de Colombia de 1991 (Artículo 72)	Protección estatal del patrimonio cultural de la nación.

Ley 397 de 1997	Se crea el Ministerio de Cultura
Decreto 833 de 2002 (Artículo 1)	Terminología utilizada (el decreto reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 en materia de patrimonio arqueológico nacional y dicta otras disposiciones).
Decreto 833 de 2002 (Artículo 4)	Conceptos técnicos y científicos de pertenencia de bienes al patrimonio arqueológico.
Decreto 833 de 2002 (Artículo 9)	Puesta de bienes integrantes del patrimonio arqueológico a disposición del Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
Decreto 833 de 2002 (Artículo 12)	Encuentro de bienes integrantes del patrimonio arqueológico durante actividades de exploración o excavación de carácter arqueológico.
Decreto 833 de 2002 (Artículo 13)	Autorización de actos de intervención material sobre zonas de influencia arqueológica.
Ley 1185 de 2008 (Artículo 1)	Integración del patrimonio cultural de la nación.
Ley 1185 de 2008 (Artículo 3)	Patrimonio arqueológico.
Ley 1185 de 2008 (Artículo 7)	Régimen especial de protección de los bienes de interés cultural.
Decreto 763 de 2009 (Artículo 56)	Áreas arqueológicas protegidas y áreas de influencia.
Decreto 763 de 2009 (Artículo 57)	Tipos de intervención sobre el patrimonio arqueológico.
Decreto 1080 de 2015, Parte II	Sistema Nacional de Cultura, Título II, Fondos Mixtos de la Cultura y las Artes, acoge el decreto 1493 de 2008; Parte IV, Patrimonio cultural material, Título I, Bienes de interés cultural, acoge los decretos 264 de 1963 y 833 de 2002 y el artículo 5° del decreto 763 de 2009
Decreto 138 de 2019	Se modifica la parte VI referente al Patrimonio Arqueológico del Decreto 1080 de 2015. Establece el Protocolo para la atención y manejo adecuado y oportuno de “Hallazgos fortuitos de bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico”
Resolución 297 de 2019	Se reglamentó la primera fase del Programa de Arqueología Preventiva. Y se adoptó el



	formulario a través del cual se llevará a cabo la solicitud de registro y el formato de verificación de información.
Resolución 041 de febrero de 2020.	Modifica la Resolución 297 de 2019. Nueva versión del formulario de solicitud de registro de intervención arqueológica y el formato de verificación de información.
Resolución 193 de mayo de 2020 y Resolución 301 de mayo de 2020	Modifica la Resolución 193 de 2020. Adoptar versión digital del formulario de solicitud de registro de intervención arqueológica.
Resolución 065 de 2020 Resolución 134 de 2020	Por la cual se acogen los términos de referencia para el desarrollo de la fase de diagnóstico y prospección del Programa de Arqueología Preventiva de que trata el artículo 2.6.5.5. del Decreto 138 de 2019, que modificó el Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura"

#### 5.1.1.9 Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

La Ley 100 de 1993 estableció la estructura de la Seguridad Social en el país, la cual consta de tres componentes como son:

- El Régimen de Pensiones
- Atención en Salud
- Sistema General de Riesgos Profesionales.

Cada uno de los anteriores componentes tiene su propia legislación y sus propios entes ejecutores y fiscales para su desarrollo.

Existe un conjunto de normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades profesionales y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan, además de mantener la vigilancia para el estricto cumplimiento de la normatividad en Salud Ocupacional (Sistema de Riesgos Ocupacionales).

El pilar de esta Legislación es el Decreto Ley 1295 de 1994, cuyos objetivos buscan establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores, fijar las prestaciones de atención en salud y las prestaciones económicas derivadas de las contingencias de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional, vigilar el cumplimiento de cada una de las normas de la Legislación en Salud Ocupacional y el esquema de administración de Salud Ocupacional a través de las Aseguradora en Riesgos Profesionales (ARP).

Particularmente, el Decreto 1295 en su Artículo 21 Literal D, obliga a los empleadores a programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de Salud Ocupacional en la empresa y su financiación. En el Artículo 22 Literal D, obliga a los trabajadores a cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del programa de Salud Ocupacional de las empresas.

En la Resolución 001016 de 1989 en el Artículo 4 y Parágrafo 1, se obliga a los empleadores a contar con un programa de Salud Ocupacional, específico y particular, de conformidad con sus riesgos potenciales y reales y el número de los trabajadores. También obliga a los empleadores a destinar los recursos humanos financieros y físicos, indispensables para el desarrollo y cumplimiento del programa de Salud Ocupacional, de acuerdo a la severidad de los riesgos y el número de trabajadores expuestos.

Igualmente, los programas de Salud Ocupacional tienen la obligación de supervisar las normas de Salud Ocupacional en toda la empresa, y en particular, en cada centro de trabajo. Anta la complejidad y magnitud de esta tarea, se hace necesario que los programas de Salud Ocupacional sean entes autónomos, que dependan directamente de una unidad Staff de la empresa, para permitir una mejor vigilancia y supervisión en el cumplimiento de cada una de las normas emanadas de la Legislación de Salud Ocupacional. Es importante tener en cuenta que la Ley 1562 de 2012 requiere un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, además del Programa de Salud Ocupacional mencionado anteriormente.

A continuación, se describen los principales Decretos y Resoluciones que reglamentan la Salud Ocupacional en Colombia:

- Ley 9a. De 1979, es la Ley marco de la Salud Ocupacional en Colombia.
- Resolución 2400 de 1979, conocida como el "Estatuto General de Seguridad".
- Decreto 614 de 1984, que crea las bases para la organización y administración de la Salud Ocupacional.
- Resolución 2013 de 1986, que establece la creación y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en las empresas.
- Resolución 1016 de 1989, que establece el funcionamiento de los Programas de Salud Ocupacional en las empresas.
- Decreto 1295 de 1994, que establece la afiliación de los funcionarios a una entidad ARP.
- Decreto 1346 de 1994, por el cual se reglamenta la integración, la financiación y el funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez.
- Decreto 1772 de 1994, por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales.
- Decreto 1832 de 1994, por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales.
- Decreto 1834 de 1994, por el cual se reglamenta el funcionamiento del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales.
- Ley 1562 de 2012 Riesgos laborales. Crea el programa de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: en lo sucesivo se entenderá como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.
- Resolución 1409 DE 2012. Crea el reglamento de seguridad para trabajo en alturas.
- Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, establece la normatividad para las relaciones laborales.
- Resolución 1111 de 2017 Establece el sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo SST.

De alta relevancia es la Resolución 2400 de 1979, que establece las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Todas estas reglamentaciones deberán ser tenidas en cuenta por el Operador y los contratistas encargados de la gestión del proyecto y son parte integral del Plan de Gestión Ambiental y Social del proyecto. Estas especificaciones serán monitoreadas por el respectivo Ente Ejecutor.

Por último, se debe considerar el Decreto 488 de 2020. "Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica".

### 5.1.1.10 *Gestión de Riesgos de Desastres*

Desde el año 2011 Colombia ha desarrollado una sólida gestión pública para la prevención y la gestión de riesgos de desastres, y para el efecto creó un organismo que es la Unidad Nacional de Riesgo de

Desastres UNGRD. Dentro las funciones asignadas por la Ley 1523 de 2012 a la UNGRD, está la de “Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reducción de este y manejo de desastres y su articulación con los procesos de desarrollo en los ámbitos nacional, territorial del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres- SNPAD”. Las principales normas para la gestión del riesgo en Colombia se detallan en los siguientes decretos y leyes:

- Ley 1523 de abril 24 de 2012, establece que la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entendiéndose: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y sus componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
- Decreto 2157 de 2017, adopta las directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012.
- Decreto 1807 de septiembre 19 de 2014, establece las condiciones y escalas de detalle para la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1974 de septiembre 11 de 2013, establece el procedimiento para la expedición y actualización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo.
- Decreto 4147 de noviembre 3 de 2011, crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y se establece su objeto y estructura.

#### 5.1.1.11 Bienes de Uso Público

En relación con la propiedad de las aguas, el artículo 677 del Código Civil, los cauces de los ríos, sus playas y playones son bienes de uso público, salvo las vertientes que nazcan y mueran en la misma heredad, o aquellas áreas sobre las cuales los particulares demuestren propiedad con títulos originarios debidamente expedidos por el Estado que no hayan perdido eficacia legal y otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil de 1873 (la Ley 57 de 1887 ratificó el Código Civil de la Nación contenido en la Ley 87 de 1873).

En todo caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 del Decreto Ley 2811 del 18 de diciembre de 1974, los dueños de predios ribereños tienen la obligación de dejar libre el espacio para usos autorizados, la navegación, la administración del curso, entre otros:

*“Los dueños de predios ribereños están obligados a dejar libre de edificaciones y cultivos el espacio necesario para los usos autorizados por ministerio de la ley, o para la navegación, o la administración del respectivo curso o lago, o la pesca o actividades similares. (...)”*

Adicionalmente, es importante mencionar que el artículo 726 del C.C. establece reglas sobre las nuevas islas que no hayan de pertenecer a la Unión, correspondiendo a aquellas de carácter no permanente. Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 83 del CNRN, en la medida que el álveo o cauce natural de las corrientes son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado, las islas no permanentes tendrán también la naturaleza de bienes de uso público, salvo que la isla se encuentre en un cuerpo de agua de propiedad privada en las condiciones indicadas anteriormente.

Igualmente se incluyen como bienes de uso público las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas, por tanto, intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes solo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a la ley y a las disposiciones del presente Decreto. En consecuencia, tales permisos o licencias no confieren título alguno sobre el suelo ni subsuelo (Art 166 del Decreto 2324 de 1984).

### 5.1.1.12 *Leyes del Sector de Construcción*

- Ley 9 de 1989: dicta la reglamentación relacionada con los entonces planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de tierra. Establece los criterios y definiciones relacionados con el espacio público y sus elementos constitutivos, su destinación, planes de renovación urbana, marco general para infracciones urbanísticas y otros.
- Ley 388 de 1997: modifica la Ley 9 de 1989 y armoniza las normas urbanísticas medioambientales y en general de desarrollo urbano en Colombia.
- Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial: La presente ley tiene por objeto dictar las normas orgánicas para la organización político-administrativa del territorio colombiano; enmarcar en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa en materia de normas y disposiciones de carácter orgánico relativas a la organización político-administrativa del Estado en el territorio; establecer los principios rectores del ordenamiento; definir el marco institucional e instrumentos para el desarrollo territorial; definir competencias en materia de ordenamiento territorial entre la Nación, las entidades territoriales y las áreas metropolitanas y establecer las normas generales para la organización territorial.
  - Esta ley reconoce la diversidad, entendida como las diferencias geográficas, institucionales, económicas, sociales, étnicas y culturales del país, como fundamento de la unidad e identidad nacional, la convivencia pacífica y la dignidad humana.
  - La Ley también promueve la participación, concertación y cooperación para que los ciudadanos tomen parte activa en las decisiones que inciden en la orientación y organización territorial.
  - La Ley de Ordenamiento Territorial reconoce los desequilibrios en el desarrollo económico, social y ambiental que existen entre diferentes regiones geográficas de nuestro país y buscará crear instrumentos para superar dichos desequilibrios. Por ello la Nación y las entidades territoriales propiciarán el acceso equitativo de todos los habitantes del territorio colombiano a las oportunidades y beneficios del desarrollo, buscando reducir los desequilibrios enunciados. Así mismo, los procesos de ordenamiento procurarán el desarrollo equilibrado de las diferentes formas de división territorial.
  - Además, la Ley reconoce la multietnicidad, para que los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, los raizales y la población ROM ejerzan su derecho de planeación y gestión dentro de la entidad territorial respectiva en armonía y concordancia con las demás comunidades y entidades territoriales.
- Decreto 1077 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, que está a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Este decreto compila más 100 decretos y ya cuenta con más de 20 modificaciones. Algunos de los requisitos a tener en cuenta son:
  - Obligación de los Municipios a incorporar la gestión del riesgo en sus normas de ordenamiento territorial (Ley 1523 de 2012).
  - Obligación por parte de los urbanizadores de realizar estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en masa o inundación como requisito previo para obtener la licencia de urbanismo (Ley 9/97).
  - Exigencia de contar con una interventoría para proyectos contratados con el Estado (Ley 80/93).
  - Obligación de presentar proyectos arquitectónicos que tengan en cuenta a las personas en condición de discapacidad (Ley 1680/13).
  - Exigencia de estudios arquitectónicos, geotécnicos, estructurales, no estructurales (Ley 400/97).

- Necesidad de contar con revisor estructural independiente y un supervisor técnico independiente en ciertos casos (Ley 1796/16).

Es en el Decreto 1077 de 2015 en el que se encuentran aspectos relacionados con el trámite para la solicitud de licencias, sanciones, clases de licencias urbanísticas, modalidades, términos de solicitudes, categorías, procedimientos, vigencia de las licencias, y otros.

Según la Asociación Colombiana de Productores de Concreto, una de las grandes dificultades en el sector de la construcción es que cada Ministerio reglamenta de manera independiente los temas que le ocupan y en muchos casos se contradicen o no se actualizan.

Un ejemplo de esta multiplicidad se da por ejemplo en estos temas:

- Los hidrantes para protección contra incendios están reglamentados con criterios diferentes en: Decreto 1077/15, Reglamento NSR10, Reglamento RAS y Código de Tránsito.
- La iluminación de emergencia es definida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Reglamento NSR10 (decretos 926/10, 2525/10, 092/11, 340/12) con unos estándares determinados, pero posteriormente el Ministerio de Minas y Energía define unas exigencias menores mediante resoluciones que adoptan los Reglamentos RETIE y RETILAP los cuales tampoco están coordinados entre sí.

### 5.1.1.13 Autoridades Ambientales

La Tabla a continuación muestra la jerarquía de autoridades ambientales EIAs, licencias y cumplimiento

**Tabla 5-2: Jerarquía de Autoridades Ambientales**

Nivel	Entidad Territorial	Autoridad Ambiental
1	Gobierno Nacional	<p>Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS)</p> <p>Responsable de la formulación de políticas ambientales y promulgación de normas para la restauración, conservación, protección, organización, manejo y uso sostenible de recursos naturales renovables y el medio ambiente.</p> <hr/> <p>Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales (ANLA)</p> <p>Responsable de la administración del proceso de EIAs, licencias ambientales, monitoreo y cumplimiento, así como la imposición de sanciones. La ANLA también es responsable de garantizar una participación pública adecuada y administrar la información relacionada con los proyectos propuestos, las licencias</p>

		ambientales y el cumplimiento ambiental
2	Departamento	<p>Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA)</p> <p>La Ley 99 de 2013 (artículo 33), crea las corporaciones autónomas regiones, dentro de las cuales se encuentra la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), con sede en la ciudad de Barranquilla.</p> <p>La CRA tiene autonomía administrativa y financiera, así como un mandato legal para formular políticas ambientales dentro de su territorio, administrar los problemas ambientales, regular el uso de recursos naturales renovables y promover el desarrollo sostenible de acuerdo con los mandatos legales y las políticas establecidas por el MADS (incluidos el desarrollo nacional y planificación de inversiones). Una CAR o una CDS puede abarcar más de un distrito.</p>
	<b>Grandes centros urbanos</b> (población >1 millón)	<p>Establecimiento Público Ambiental denominado "<b>BARRANQUILLA VERDE</b>", <b>Autoridad Ambiental Urbana (AAU)</b>.</p> <p>El Decreto Acordal 0842 de 2016, crea el Establecimiento Público Ambiental denominado "<b>BARRANQUILLA VERDE</b>", del sector descentralizado por servicios, adscrito al Despacho del Alcalde de Barranquilla, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y técnica, con patrimonio propio e independiente, con el objeto de ser la <b>Autoridad Ambiental del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla</b>, en los términos de las Leyes 99 de 1993 y 768 de 2002 y las normas complementarias.</p> <p>Estas entidades tienen las mismas funciones que las CRA, regulan las</p>

		emisiones, los efluentes, los desechos sólidos y la eliminación de desechos peligrosos, prescriben medidas para la remediación o mitigación de daños ambientales.
3	<b>Distritos especiales:</b> ciudad portuaria, turística, cultural o histórica. Población >600.000	<b>Consejo Distrital</b> , alcalde distrital, alcaldes locales y paneles administrativos. Refieren a la ANLA las actividades sujetas a jurisdicción nacional. Los distritos especiales están sujetos a un tratamiento especializado y tienen poderes especiales distintos de los aplicables a otros municipios.
	<b>Distritos especiales:</b> turismo caribeño, zona portuaria. Población > 600.000	<b>Establecimiento público</b> , compuesto por el gobernador departamental y representantes del sector privado, organizaciones sin fines de lucro o no gubernamentales (ONG), el MADS, el director del Instituto de Investigación Marina y Costera, el director del Instituto General Marítimo, el director de la CAR aplicable a la jurisdicción.
	<b>Municipios y pequeñas comunidades</b> (población < 1 millón)	<b>Autoridades ambientales municipales o locales</b> , si están presentes (para asuntos no sujetos a la jurisdicción de la entidad regional (CAR o CDS) o ANLA.

#### 5.1.1.14 Otros Instituciones Relevantes

La Tabla a continuación muestra otras instituciones relevantes al Programa.

**Tabla 5-3: Otros Instituciones Relevantes al Programa**

Institución	Función
Departamento Nacional de Planeación (DNP)	<p>Las funciones del DNP están establecidas en el Decreto 1832 de 2012 y entre ellas son destacables:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Coordinar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo para su evaluación por parte del Consejo Nacional de Planeación, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES y para su posterior presentación al Congreso de la República.</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Desarrollar los lineamientos de planeación impartidos por el Presidente de la República y coordinar el trabajo de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de resultados del Plan Nacional de Desarrollo y de otras políticas del Gobierno Nacional con los Ministerios, Departamentos Administrativos y entidades territoriales.</li> <li>■ Presentar al presidente de la República informes periódicos acerca del cumplimiento de los planes de desarrollo y los demás que éste solicite, así como asesorarlo en la preparación del informe que sobre la misma materia debe presentar anualmente al Congreso de la República.</li> <li>■ Brindar apoyo técnico a las entidades públicas del orden nacional y territorial para el desarrollo de sus funciones en los temas de competencia del Departamento Nacional de Planeación.</li> <li>■ Coordinar y apoyar la planeación de corto, mediano y largo plazo de los sectores, que orienten la definición de políticas públicas y la priorización de los recursos de inversión, entre otros los provenientes del Presupuesto General de la Nación y el Sistema General de Regalías.</li> </ul>
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	<p>El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es la entidad pública de orden nacional responsable de formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenibles del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.</p>

## 5.1.2 Leyes y Regulaciones y Locales

### 5.1.2.1 Normativas y Autoridades Ambientales Territoriales

- El artículo 66 de la Ley 99 de 1993 establece las competencias en materia ambiental para grandes centros urbanos (Distritos) y ejercer las mismas funciones atribuidas a los a las Corporaciones Autónomas regionales en el área de su jurisdicción.
- Ley 768 de 2002 (artículo 13): Dispone que la competencia ambiental de los Distritos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, dentro del perímetro urbano de la cabecera distrital, lo ejercerá un establecimiento público con las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones



Autónomas Regionales, en lo aplicable al medio ambiente urbano, en los mismos términos del artículo 66 de la Ley 99 de 1993.

- La Ley 1625 de 2013 Dicta normas orgánicas para dotar a las Áreas Metropolitanas de un régimen político, administrativo y fiscal que dentro de la autonomía reconocida por la Constitución Política y la ley sirva de instrumento de gestión para cumplir con sus funciones, y señala su objeto, naturaleza, competencias, funciones constitución, entre otras.
- Autoridad ambiental local (Distrito de Barranquilla): Decreto Acordal 0842 de 2016, crea el Establecimiento Público Ambiental denominado “BARRANQUILLA VERDE”, del sector descentralizado por servicios, adscrito al Despacho del Alcalde de Barranquilla, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y técnica, con patrimonio propio e independiente, con el objeto de ser la autoridad ambiental del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, en los términos de las Leyes 99 de 1993 y 768 de 2002 y las normas complementarias.

## 5.2 Descripción de los Roles y las Responsabilidades Institucionales

El prestatario y Organismo Ejecutor (OE) del Programa será el Distrito de Barranquilla (“el Distrito”), y como garante a la República de Colombia. Se conformará una Unidad Coordinadora de Programa (UCP) dependiente de la Gerencia de Proyectos Especiales en el Despacho del Alcalde Distrital cuya responsabilidad será de garantizar la eficiente gestión de los proyectos financiados con la operación, prestando especial atención a la planificación y monitoreo, la gestión financiera y de adquisiciones, gestión de calidad y la gestión de riesgos. Para asegurar la apropiación de parte del OE de la gestión de los proyectos financiados con la operación y la donación, se designarán enlaces institucionales que aseguren la transferencia de conocimiento y la instalación de capacidades en el OE de parte de los especialistas contratados en la UCP.

El esquema de ejecución consistirá en una coordinación general cuya responsabilidad estará bajo un Gerente de Proyectos Especiales (GPE) designado por la autoridad correspondiente del Distrito de Barranquilla a tiempo completo y con dedicación exclusiva. El GPE coordinará la UCP, asegurando la incorporación de la operación en la vida institucional del Distrito. Con los recursos de administración del préstamo se financiará la contratación a tiempo completo de: (i) un Director de Proyectos cuya responsabilidad se centrará en la gestión operativa de los proyectos financiados con el programa; (ii) un especialista en adquisiciones, responsable del plan de adquisiciones y su gestión; (iii) un especialista financiero, responsable de la gestión financiera; (iv) un especialista en salvaguardas sociales, con experiencia en enfoque de género en proyectos; y (v) un especialista en salvaguardas ambientales, quienes deberán asegurar la implementación adecuada de las políticas de salvaguardas del Banco.

Dependiendo del tipo de Proyecto, también se involucrarán diferentes agencias del distrito, como la Agencia Distrital de Infraestructura, la Secretaría de Recreación y Deportes, y la Secretaría Distrital de Obras Públicas.

## 6. POLÍTICAS Y DIRECTIVAS APLICABLES DEL BID

Las Políticas y Directivas del BID aplicables al análisis de equivalencia y aceptabilidad realizado son las siguientes:

- Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias- OP-703
  - Las salvaguardias en esta política rigen para todo el ciclo de los proyectos en el Programa, con el propósito de asegurar la viabilidad ambiental de las inversiones del Banco. De acuerdo a las prácticas de desarrollo sustentable, el Banco prioriza la prevención y cuando sea necesario la mitigación y la gestión plena de impactos negativos.
  - Las Evaluaciones Ambientales y sus Planes de Gestión están diseñados como procesos de identificación y atención a dichos impactos. Las Salvaguardias proveen detalles sobre que

contenido debería haber en tanto las Evaluaciones como los Planes de Gestión, aparte de detalles sobre temas de importancia tal como la legislación nacional, procesos consultivos, supervisión y cumplimiento entre otros. Lineamientos de Implementación de la Política de Medio Ambiente fueron aprobados en el año 2007.

- Esta política es relevante al Programa debido a ser recipiente de recursos financieros del Banco.
- **Política de Gestión de Desastres Naturales e Inesperados- OP-704**
  - La política fue formulada para atender la vulnerabilidad elevada que sienten poblaciones en procesos de desarrollo al vivir por un desastre natural o inesperado. La política asigna importancia especial a la reducción de riesgo, buscando mejorar el marco institucional y el respaldo de gestión del riesgo de desastres. Las Directrices Para la Aplicación de la Política del Riesgo de Desastres fueron aprobadas en el año 2008.
  - Esta política es relevante al Programa debido a ser recipiente de recursos financieros del Banco.
- **Política de Reasentamiento Involuntario- OP-710**
  - Esta política fue diseñada a atender los riesgos y las vulnerabilidades asociadas con desplazamiento físico involuntarios asociados con el desarrollo de un Proyecto. Busca evitar, minimizar o gestionar la necesidad de desplazamiento físico y si no fuese posible, minimizando cambios que perjudican el modo de vida de poblaciones, tanto económicamente como socialmente. Los lineamientos relevantes en esta política fueron aprobados en el año 1999.
  - Esta política puede ser aplicable si es necesaria la adquisición de tierras privadas para los proyectos financiados por el Programa.
- **Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo- OP-761**
  - Basada en investigaciones extensas sobre procesos de desarrollo, la política busca integrar temas sobre vulnerabilidades asociadas con género al proceso de evaluación de impactos y a planes de gestión. Toma en consideración la experiencia del Banco en su apoyo a la integración de las mujeres como líderes, participantes y beneficiarias del desarrollo.
  - Esta política es relevante al Programa debido que las actividades de desarrollo impactarán a ambos géneros.
- **Política Operativo sobre Pueblos Indígenas- OP-765**
  - El Banco busca apoyar procesos de desarrollo socioculturalmente apropiados de la economía y la gobernabilidad de Pueblos Indígenas, reconociendo sus derechos, aspiraciones y necesidades. Por medio de esta política se busca minimizar la vulnerabilidad que estos grupos podrían llegar a sentir al enfrentar proyectos de desarrollo en sus territorios, y apoyar el desarrollo pleno de comunidades indígenas en el Área de Influencia de sus proyectos.
  - Esta política puede ser aplicable si los proyectos financiados por el Programa se encuentran en pueblos indígenas o si es determinado que los proyectos impactan a la población indígena.
- **Política Operativa de Acceso a Información – OP-102**
  - Con esta Política el Banco busca demostrar el uso transparente que hace de los fondos públicos y, al estrechar sus relaciones con los interesados, mejorar la calidad de sus operaciones y actividades de conocimiento y fortalecimiento de capacidad. El banco divulgará la información generada por el Banco y se compromete a proveer máximo acceso a la información, siempre y cuando la divulgación de información No sea más perjudicial que benéfica para los intereses, entidades o partes afectados, que el Banco esté legalmente

obligado a abstenerse de divulgar la información o que ésta se haya recibido en el entendido de que no será divulgada.

- Esta política es aplicable al Programa debido a ser recipiente de recursos financieros del Banco.

## 7. ANÁLISIS DE EQUIVALENCIA

Colombia cuenta con una extensa y moderna legislación ambiental, así como también con leyes y regulaciones en materia social que permiten regular las actividades asociadas al Proyecto (ver Sección 5).

A continuación, en la Tabla 7-1 se presenta un análisis de la equivalencia entre los sistemas nacionales y provinciales aplicables al Programa y los requisitos aplicables de las políticas del Banco, describiendo la equivalencia como plena, parcial o no equivalente. En el análisis también se presenta una justificación de la categorización.

Se encontraron seis (6) equivalencias totales plenas entre los sistemas nacionales y los principios de las salvaguardias del BID aplicables al Proyecto: 1) entre el principio de la Directiva B.2 que requiere que la operación se diseñe y se lleve a cabo en cumplimiento con la legislación y las normativas ambientales del país y los resultados del análisis realizado, 2) entre el requisito de equidad de género en la normativa nacional y la OP-761 del BID, 3) entre el requisito de gestión del riesgo de desastres en la normativa nacional y la OP-704 del BID, 4) entre el requisito de garantizar la participación de los ciudadanos en la normativa nacional y la OP-102 del BID, 5) entre el requisito de evitar impactos adversos al medioambiente y a la seguridad y la salud humana en la normativa nacional y la OP-703 B10 del BID, y 6) entre las medidas para prevenir, disminuir o eliminar la contaminación en la normativa nacional y la OP-703 B11 del BID.

Por otro lado, se identificaron cinco (5) equivalencias totales Parciales, de las cuales cuatro (4) hacen referencia a la OP-703; y una equivalencia total No Equivalente.

El Resultado de No Equivalencia evidencia principalmente una falta de herramientas y mecanismos de implementación del marco regulatorio aplicable (equivalencia procedimental), así como una limitada implementación y verificación de la efectividad de dicho marco. Para más del 90% de los principios de salvaguardias aplicables, se evidencia una equivalencia conceptual plena entre el sistema nacional y las salvaguardas del Banco, lo cual indica que las brechas en la equivalencia total reportada se concentran en la falta de procedimientos y en una limitada efectividad en la práctica.

**Tabla 7-1: Análisis de equivalencia entre la política del Banco y los sistemas nacionales/provinciales aplicables al Programa**

Requisito		Equivalencia			Justificación
		Plena	Parcial	No Equiv.	
OP-703 B2	El Banco requerirá que el prestatario garantice que la operación se diseñe y se lleve a cabo en cumplimiento con la legislación y las normativas ambientales del país en el que se está desarrollando la operación.				En el marco del análisis realizado no se detectaron incumplimientos de la normativa aplicable.
OP-703 B5	El Banco exigirá el cumplimiento de estándares específicos para la realización de				Si bien existe una equivalencia casi total a nivel conceptual entre lo que solicita el Banco y la normativa colombiana aplicable,

	Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE), Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y análisis ambientales				en la práctica las EIA y PGAS exigidas por el Banco suelen tener estándares más altos en relación a los siguientes puntos: análisis de alternativas, análisis de los impactos sociales, positivos y/o impactos durante la operación, consideración de impactos acumulativos, líneas de base con monitoreos específicos en el área de influencia del proyecto.
OP-703 B5	La política menciona la necesidad de desarrollo de medidas de compensación a población afectada según sea necesario				Esta política puede ser aplicable si llegase a ser necesaria la adquisición de tierras privadas para los proyectos financiados por el Programa. Mientras que la legislación colombiana describe el reasentamiento involuntario y la adquisición de tierras y servidumbres, existen brechas entre el proceso dictado por la legislación colombiana y la política operativa del BID OP-703 (por ej., cómo se calcula el precio de adquisición o cómo se atienden los casos de desplazamiento económico.)
OP-703 B6	Como parte del proceso de evaluación ambiental, las operaciones clasificadas bajo las Categorías A y B requerirán consultas con las partes afectadas y se considerarán sus puntos de vista. Para propósitos de la consulta se deberá suministrar la información en los lugares, idiomas y formatos que permitan consultas de buena fe con las partes afectadas, y se formen una opinión y hagan comentarios sobre el curso de acción propuesto.				Colombia tiene un extenso marco legal para garantizar la participación de los ciudadanos en programas y proyectos de desarrollo. Esto no se considera totalmente equivalente porque la política del Banco tiene un enfoque más proactivo a las formas de consulta y más amplio en relación con el tipo de obras a consultar.
OP-703 B6	Durante la ejecución del proyecto las partes afectadas deberían ser informadas sobre las medidas de mitigación ambiental y social que				La normativa colombiana aplicable establece que las autoridades están obligadas al establecimiento de un plan de manejo ambiental al igual que al control y seguimiento por parte

	les afecte, según se defina en el PGAS.				de las autoridades ambientales para suministrar la información requerida por las partes afectadas. Sin embargo, de conformidad con lo establecido por las regulaciones nacionales son las personas interesadas las que deben movilizarse y buscar los mecanismos para emitir su opinión.
OP-703 B9	"El Banco no apoyará operaciones y actividades que en su opinión conviertan o degraden significativamente hábitats naturales críticos o que dañen sitios de importancia cultural crítica".				La legislación colombiana no tiene normas específicas que definan o rijan usos de hábitats críticos; solo tiene normativas sobre la intervención de áreas protegidas.  Esto sería relevante solo si los proyectos pudieran afectar hábitat naturales críticos no protegidos legalmente.
OP-703 B10	"Las operaciones financiadas por el Banco deberán evitar los impactos adversos al medio ambiente, a la salud y a la seguridad humana derivados de la producción, adquisición, uso y disposición final de materiales peligrosos".				En la legislación colombiana existen normas equivalentes para evitar impactos adversos al medioambiente y a la seguridad y la salud humana, por ej. la Ley 9a. de 1979 y la Resolución 1111 de 2017.
OP-703 B11	"Las operaciones financiadas por el Banco incluirán, según corresponda, medidas destinadas a prevenir, disminuir o eliminar la contaminación resultante de sus actividades".				La normativa colombiana establece un conjunto de obligaciones legales con respecto a prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos ambientales de la actividad autorizada.
OP-761	"La Política identifica dos líneas de acción: (i) la acción proactiva, que promueve activamente la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a través de todas las intervenciones de desarrollo del Banco; y (ii) la acción preventiva, que integra salvaguardias a fin de prevenir o mitigar los impactos negativos sobre mujeres u hombres				La legislación colombiana ratifica las normas, medidas y acuerdos establecidos en mecanismos de las Naciones Unidas. Asimismo, por medio de la Ley 1009 de 2006 se creó el Observatorio de Asuntos entre Género (OAG) como mecanismo de seguimiento al cumplimiento de normas nacionales e internacionales vigentes y las políticas públicas, planes y programas, relacionados con la equidad de las mujeres, a fin de conocer el impacto diferenciado que tiene entre hombres y mujeres, con el objeto de hacer recomendaciones que

	por razones de género, como resultado de la acción del Banco a través de sus operaciones financieras				contribuyan a eliminar las discriminaciones y a superar las inequidades de género que se presentan en el país.
OP-765	"[R]espetar los derechos reconocidos de acuerdo a las normas de derecho aplicables e incluir en los proyectos de extracción y de manejo de recursos naturales y gestión de áreas protegidas: (i) mecanismos de consulta previa para salvaguardar la integridad física, cultural y económica de los pueblos afectados y la sostenibilidad de las áreas o recursos naturales protegida".				Existe una brecha parcial entre la OP-765 y la legislación colombiana en cuanto al tema de la Consulta Previa. La legislación colombiana requiere la Consulta Previa en un proyecto, trabajo o actividad que involucra la extracción de recursos en un área habitada por comunidades indígenas, mientras que la OP-765 aplicaría a cualquier proyecto, trabajo o actividad en territorios indígenas.  Sin embargo, todos los proyectos bajo el Programa son categoría B <sup>10</sup> y no se financiarán proyectos de categoría A.
OP-704	"Esta política fue formulada para atender la vulnerabilidad elevada que sienten poblaciones que se han visto afectadas por desastres naturales. La política asigna importancia especial a la reducción de riesgo, buscando mejorar el marco institucional y el respaldo de gestión del riesgo de desastres". La política establece que "Si en cualquier punto del proceso de preparación del proyecto se encontrasen riesgos graves debidos a amenazas naturales, habrán de adoptarse medidas adecuadas para establecer la viabilidad del proyecto, incluida la protección de los habitantes y las inversiones afectados por actividades financiadas por el				Desde el año 2011 Colombia ha desarrollado una sólida gestión pública para la prevención y la gestión de riesgos de desastres, y para el efecto creó un organismo que es la Unidad Nacional de Riesgo de Desastres UNGRD. Dentro las funciones asignadas por la Ley 1523 de 2012 a la UNGRD, está la de "Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reducción de este y manejo de desastres y su articulación con los procesos de desarrollo en los ámbitos nacional, territorial del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres- SNPAD

<sup>10</sup> Los proyectos de Categoría B "probablemente causen impactos negativos mayoritariamente locales y a corto plazo", para los cuales "se dispone de medidas de mitigación típicas y eficaces".

	Banco. Habrá que analizar medidas alternativas de prevención y mitigación reduzcan la vulnerabilidad e incluirlas en el diseño y ejecución del proyecto según proceda. Estas medidas deberían incluir la planificación de seguridad y para imprevistos destinada a proteger la salud humana y los bienes económicos. "				
OP-102	El Banco procura maximizar el acceso a la información que genera y, por tanto, divulga cualquier información que no figura en la lista de excepciones. La política no se articula en torno a una lista de información autorizada para su divulgación sino en una definición clara de la información que no se habrá de divulgar."				Colombia tiene un extenso marco legal para garantizar la participación de los ciudadanos en programas y proyectos de desarrollo. Sin embargo, cabe mencionar que Colombia no ha ratificado el Acuerdo de Escazú.
	<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	

## 8. ANÁLISIS DE ACEPTABILIDAD

La aceptabilidad de los sistemas nacionales ambientales y sociales del país con respecto a las políticas de salvaguarda del BID se encuentra directamente relacionada con la capacidad y efectividad de la UCP de aplicar la normativa colombiana en la ejecución del Proyecto para la gestión de riesgos socio-ambientales asociados. Para el análisis de aceptabilidad se seleccionaron dos (2) proyectos específicos los cuales se emplearon como ejemplos para analizar la aceptabilidad: *Parque Bicentenario* y *Parque Los Trupillos*. Estos proyectos fueron seleccionados para representar proyectos que se encuentran avanzados a fin de evaluar su desempeño en la implementación de los sistemas nacionales.

Se encontró que el sistema nacional de gestión ambiental y social de Colombia y su aplicación por parte de la UCP presenta un nivel de aceptabilidad "condicionada" para 10 de los 11 principios de salvaguardias del Banco aplicables a los dos proyectos evaluados. El nivel de aceptabilidad con respecto del principio restante es "sin condiciones".

Las condiciones de aceptabilidad planteadas están enfocadas mayormente en procesos de capacitación, y la implementación de planes de gestión socio-ambientales.

No se identificó ningún principio de las directivas de Salvaguarda para el cual haya un nivel de inaceptabilidad en relación a los sistemas nacionales ambientales y sociales del país.

A continuación, se presentan los resultados del análisis de aceptabilidad.



## **Aceptabilidad Sin Condiciones**

- OP-703 – B.5: “El Banco exigirá el cumplimiento de estándares específicos para la realización de Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE)”. En una primera instancia se contrató un servicio de consultoría para el desarrollo de una EASE, AAS, y PGAS para todo el Programa. En noviembre de 2021 se publicó en la página web del Banco la EASE y el AAS, los cuales incluyen un resumen del marco regulatorio nacional, un análisis de las salvaguardas ambientales y sociales del BID aplicables, una línea base que describe los proyectos y el área en la que se desarrollan, un mapeo de los actores principales de las comunidades involucradas, y una evaluación de impactos, riesgos y oportunidades – tomando en cuenta temas como la igualdad de género – y, finalmente, los planes de mitigación, manejo y monitoreo

## **Aceptabilidad Con Condiciones**

- OP-703 – Directiva B.5: *‘Necesidad de desarrollo de medidas de compensación económica a población afectada según sea necesario’*. La aceptabilidad con respecto a este principio está condicionada a: 1) la aplicación de protocolos de compensación para la compra de terrenos, y 2) la capacitación sobre compensaciones económicas adecuadas.
- OP-703 – Directiva B.5: *Impactos potenciales deben ser adecuadamente evaluados y mitigados y manejados; para que los impactos sean adecuadamente analizados, mitigados y compensados, en algunos casos puede ser necesario el desarrollo de un Plan de Restauración de Medios de Subsistencia*: La aceptabilidad está condicionada a la implementación de criterios de exclusión de actividades con el potencial de generar desplazamiento económico y/o físico (resultando en un consecuente riesgo de empobrecimiento) de las familias y grupos más vulnerables. Asegurando también que las personas no elegibles al proceso de titulación (por ejemplo, aquellas que no cuenten con documentación en regla), no sean vulneradas (forzadas a abandonar su actividad).
- OP-703 – Directiva B.6: *“Necesidad de desarrollar e implementar un mecanismo de recepción de quejas y reclamos”*. La aceptabilidad con respecto a este principio está condicionada a: 1) la implementación de un sistema integrado de participación durante todo el proyecto, y 2) el establecimiento y mantenimiento de un sistema de quejas y reclamos.
- OP-703 – Directiva B.7: *“El Banco supervisará el acatamiento de todos los requisitos de salvaguardia estipulados en el acuerdo de préstamo y en los reglamentos de crédito u operacionales del proyecto por parte de la agencia ejecutora/patrocinador”*. La aceptabilidad con respecto a este principio está condicionada a: 1) establecer los mecanismos de supervisión y monitoreo y medidas para asegurar transparencia, y el establecimiento de una plataforma en la cual se publiquen los resultados del Programa.
- OP-703 – Directiva B.9: *“El Banco no apoyará operaciones y actividades que en su opinión conviertan o degraden significativamente hábitats naturales críticos o que dañen sitios de importancia cultural crítica”*. La aceptabilidad con respecto a este principio está condicionada a que se delimiten áreas naturales protegidas en zonas críticas y a que se incluyan en las especificaciones técnicas de adopción ya existentes del requerimiento de que toda actividad áreas protegidas deberá ser evitada, o en su defecto, elaborar un plan de manejo ambiental sujeto a control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales.
- OP-703 – Directiva B.10: *“Evitar los impactos adversos al medio ambiente, a la salud y a la seguridad humana derivados de la producción, adquisición, uso y disposición final de materiales peligrosos.”* La aceptabilidad con respecto a este principio está condicionada a un programa de capacitación sobre el uso adecuado de prevención contaminación y aspectos de salud y seguridad ocupacional. Asimismo, se deberá asegurar que el Proyecto cuenta con un programa de Salud Ocupacional, específico y particular, de conformidad con sus riesgos potenciales y reales y el número de los trabajadores.



- OP-703 – Directiva B.11: “Las operaciones financiadas por el Banco incluirán, según corresponda, medidas destinadas a prevenir, disminuir o eliminar la contaminación resultante de sus actividades.” La aceptabilidad con respecto a este principio está condicionada al seguimiento de la normativa nacional con respecto al uso de materiales peligrosos y prevención de contaminación.
- OP-102: “El objetivo de esta política es maximizar el acceso a la información poniendo a disposición del público información relacionada a los proyectos del BID. Esta información debe ser divulgada en el tiempo y la forma apropiada para mejorar la transparencia; Necesidad de transparencia en procesos”. La aceptabilidad con respecto a este principio está condicionada a la implementación de un programa de capacitación para supervisar y documentar adecuadamente el uso de los fondos, así como los mecanismos de supervisión y monitoreo y medidas para asegurar transparencia. También se debe establecer una plataforma para la divulgación de información.
- OP-704: “Esta política/directiva fue formulada para atender la vulnerabilidad elevada que sienten poblaciones que se han visto afectadas por desastres naturales. La misma asigna importancia especial a la reducción de riesgo”. La aceptabilidad con respecto a esta política está condicionada a la implementación de un programa de capacitación sobre respuesta ante emergencias con particular énfasis a la disminución de riesgo.
- OP-761: “Esta política/directiva identifica dos líneas de acción: (i) la acción proactiva, que promueve activamente la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a través de todas las intervenciones de desarrollo del Banco; y (ii) la acción preventiva, que integra salvaguardias a fin de prevenir o mitigar los impactos negativos sobre mujeres u hombres”. La aceptabilidad con respecto a esta política está condicionada a la implementación de un programa de capacitación sobre la participación de la mujer.

## 9. PRINCIPALES BRECHAS IDENTIFICADAS

Con base a los resultados del análisis de equivalencia y aceptabilidad realizados entre los sistemas nacionales y las salvaguardas del Banco, las principales brechas identificadas son las siguientes:

- Inexperiencia del Ejecutor en operaciones financiadas por el Banco
- Potencial afectación de áreas naturales críticas
- Potencial participación limitada de partes interesadas/afectadas
- Potencial de que las quejas y/o conflictos de partes interesadas/afectadas gestionados inadecuadamente

Para cada uno de las cuatro (4) brechas se han identificado una o más medidas de mitigación orientadas a cerrarlas, haciendo que el Proyecto sea viable para el financiamiento del BID bajo la modalidad de préstamo basado en resultados. Dichas medidas son detalladas en el Plan de Acción a continuación.

## 10. PLAN DE ACCIÓN

Para cada una de las brechas identificadas (4 en total), el Plan de Acción propone medidas de mitigación orientadas a cerrarlas. La tabla a continuación presenta un resumen de las principales brechas identificadas, las medidas propuestas para gestionarlos de manera adecuada y cerrar las brechas identificadas, y las modalidades a través de las cuales dichas medidas se operativizarán en el contexto de la operación.

**Tabla 10-1: Resumen de las brechas identificadas y medidas para cerrarlas**

Brecha	Medida de mitigación para cerrar brechas
1. Inexperiencia del Ejecutor en operaciones financiadas por el Banco; limitada capacidad institucional para gestión del riesgo	1.1. Capacitaciones dirigidas a abordar vacíos entre salvaguardas y sistemas nacionales 1.2. El Ejecutor deberá llevar a cabo un análisis de riesgo y definir un plan de manejo de emergencias y contingencias
2. Potencial afectación de áreas naturales críticas	2. Evaluar si existen áreas naturales críticas en áreas de impacto del Proyecto y aplicar medidas de mitigación apropiadas
3. Participación limitada de partes interesadas/afectadas	3. Plan de participación ciudadana
4. Quejas y/o conflictos de partes interesadas/afectadas gestionados inadecuadamente	4. Mecanismo de gestión de quejas y reclamos

## 10.1 Indicadores de Desempeño

Los indicadores de desempeño para evaluar la efectividad de las medidas de mitigación se resumen en la siguiente Tabla:

**Tabla 10-2: Resumen de Medidas e Indicadores**

Medidas	Indicadores
Limitada capacidad institucional para gestión del riesgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Capacitaciones <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Eventos realizados</li> <li>○ Número de temáticas abordadas</li> </ul> </li> <li>■ Plan de manejo de emergencias y contingencias</li> </ul>
Medidas para evitar la participación limitada de partes interesadas/afectadas; quejas y/o conflictos de partes interesadas/afectadas gestionados inadecuadamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Plan de participación ciudadana, sistema de gestión de quejas y resolución de conflictos, y plataforma de divulgación de información documentados</li> <li>■ Agendas y registros de reuniones de los comités locales</li> <li>■ Número de quejas recibidas y atendidas</li> </ul>
Medidas para evitar la afectación de áreas naturales críticas	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fichas técnicas, matriz de productos y matriz de desembolsos del Proyecto con las indicaciones respectivas.</li> <li>■ Sistema de monitoreo de las actividades de los proyectos y área de impacto.</li> </ul>

## 10.2 Monitoreo del Plan de Acción

Para todas las medias propuestas, la UCP deberá medir los indicadores de desempeño específicos según lo estipulado en el Plan de Acción, y preparará informes semestrales de cumplimiento con el Plan de Acción, a satisfacción del Banco.

## 11. CONCLUSIONES

Este análisis de equivalencia y aceptabilidad de los sistemas nacionales de Colombia para la gestión ambiental y social del Programa de Biodiversidad y Equidad Urbana en Barranquilla con respecto a las políticas y salvaguardas del BID indica que los proyectos pueden llevarse a cabo de manera satisfactoria y aceptable para un financiamiento por Pago Basado en Resultados, siempre y cuando se implementen las medidas de mitigación delineadas en este documento.

Las principales medidas de mitigación para cerrar brechas de aceptabilidad se pueden agrupar en dos líneas de acción principales:

- **Capacitación:** Los esfuerzos de capacitación apoyarán a la comunidad en las áreas de influencia de los proyectos del Programa de Biodiversidad y Equidad Urbana en Barranquilla, y al ente ejecutor. Las capacitaciones estarán enfocadas en la generación de conocimientos en torno a los principales vacíos entre salvaguardas del Banco y la legislación nacional y local.
- **Medidas para mejorar la ejecución de los Proyectos y mitigar riesgos e impactos socio-ambientales:** Estas medidas están enfocadas a asegurar la participación equitativa de mujeres, la transparencia de los procesos, proveer mecanismos efectivos de participación comunitaria y gestión de quejas y reclamos, y elaborar un plan de manejo ambiental sujeto a control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales. Incluye también medidas de seguimiento de acciones implementadas.